



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO



Tesis

**La política pública de bienestar familiar frente a la satisfacción de los
alimentos del menor ante el incumplimiento de la obligación**

Autora:

Bach. Ventura Pacheco Luz Eliana

Asesor:

Dr. Mondoñedo Valle Amador Nicolas

Para optar el título profesional de Abogada

Fecha de sustentación: 15 de marzo 2024

Lambayeque, marzo de 2024

Tesis titulada: “La política pública de bienestar familiar frente a la satisfacción de los alimentos del menor ante el incumplimiento de la obligación”, presentada para optar el título profesional de Abogada por:



Bach. Ventura Pacheco Luz Eliana
Autora

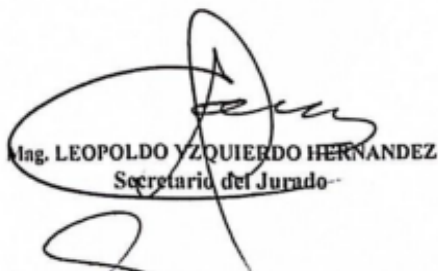


Dr. Mondoñedo Valle Amador Nicolás
Asesor

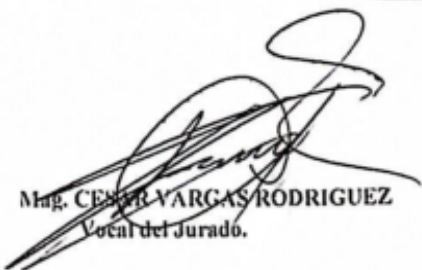
Aprobado por:



Dr. RAFAEL HERNANDEZ CANELO
Presidente del Jurado



Mag. LEOPOLDO YZQUIERDO HERNANDEZ
Secretario del Jurado



Mag. CESAR VARGAS RODRIGUEZ
Vocal del Jurado.

Dedicatoria

Dedico mi trabajo de tesis a mi abuela materna, Margarita Gómez Chapoñan, quien no se encuentra físicamente presente, agradecerle por darme una infancia plena y llena de felicidad, cuyo afecto por mí persona no conocía los límites, por su inquebrantable apoyo y cariño que aún prevalece en mi corazón. Agradezco la formación y educación que me brindo, e inculcarme el ejemplo de esfuerzo y valentía, de no temer ante las adversidades porque Dios está conmigo siempre.

Este logro es en tu memoria, porque fue gracias a tu fortaleza, sabiduría y dedicación aprendí a nunca rendirme. Sé que nunca podre retribuir todo lo que hiciste por mí. Mi corazón aún siente y lamenta tu ausencia, sin embargo, sé que estás orgullosa de mí desde donde estás. Eres mi heroína, mi ejemplo a seguir, esta dedicatoria es mi manera de decirte que nunca te olvidaré.

Agradecimiento

A Dios

Por guiarme por el sendero de luz y darme la motivación espiritual para continuar y no desmayar ante las adversidades, ni desfallecer en el intento, los cuales junto a su infinita misericordia y bondad aportaron a que concrete esta etapa de mi vida profesional con éxito.

A mis padres

Por sus consejos, y su inconmensurable apoyo el cual hizo posible llegar a este momento; así mismo por las enseñanzas, valores, principios inculcados desde la niñez que me han permitido ser la persona que hoy en día soy, todo ello con una gran dosis de amor sin tener que pedir algo a cambio, son ustedes mi sostén primordial para superarme cada día

A mis hermanas y sobrinos

Heysi, Miriam, Anghely, Ventura quien, junto a mis queridos progenitores, me demuestran a diario su apoyo emocional e incondicional, por compartir alegrías y dificultades y estar en cada momento de mi vida; A mis sobrinos Manuel y Leo Gael, que son una gran bendición de Dios, me siento una persona afortunada de tenerlos a mi lado son mi felicidad, llenan mis días de mucho amor, su energía y entusiasmo me han dado una nueva perspectiva sobre la vida.

A mis abuelitos

Margarita Gómez Chapoñan (QEDP), Segundo Pacheco Severino (QEDP), quienes, desde el cielo, estoy segura, que guían mis pasos en cada momento, sé que desde donde están se seguirían sintiendo orgullosos que mis metas trazadas se estén concretando.

Asesor

Expreso mi más sincero agradecimiento a mi asesor de tesis Dr. Mondoñedo Valle Amador Nicolás, por su gran calidad humana, por sus aportaciones realizadas, críticas constructivas, por su significativo y aporte cuya contribución activa y en el impulso del desarrollo de mi tesis. Debo enfatizar, la disponibilidad de tiempo y predisposición.



ACTA DE SUSTENTACIÓN

A C T A DE SUSTENTACIÓN PRESENCIAL N° 22-2024-UI-FDCP

Sustentación para optar el Título de ABOGADA de: **Luz Eliana Ventura Pacheco**.

Siendo las 4:00 p.m. del día viernes 15 de marzo del 2024 se reunieron en la sala de simulación de audiencias 1 de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", los miembros del jurado evaluador de la tesis titulada: "**LA POLÍTICA PÚBLICA DE BIENESTAR FAMILIAR FRENTE A LA SATISFACCIÓN DE LOS ALIMENTOS DEL MENOR ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN**", designados por Resolución N° 297-2022-FDCP-VIRTUAL de fecha 17 de octubre del 2022, con la finalidad Evaluar y Calificar la sustentación de la tesis antes mencionada, por parte de los Señores Catedráticos:

PRESIDENTE : Dr. RAFAEL HERNANDEZ CANELO.
SECRETARIO : Mag. LEOPOLDO YZQUIERDO HERNANDEZ.
VOCAL : Mag. CESAR VARGAS RODRIGUEZ

La tesis fue asesorada por Dr. AMADOR NICOLAS MONDOÑEDO VALLE, nombrada por Resolución N°297-2022-FDCP-VIRTUAL de fecha 17 de octubre del 2022.


El acto de sustentación fue autorizado por Resolución N° 145-2024-FDCP-VIRTUAL de fecha 15 de marzo del 2024.

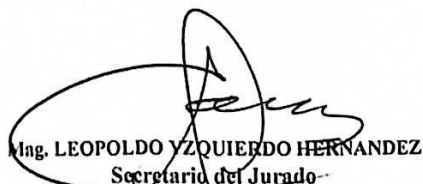
La tesis fue presentada y sustentada por la bachiller **Luz Eliana Ventura Pacheco** y tuvo una duración de 30 minutos. Después de la sustentación y absueltas las preguntas y observaciones de los miembros del jurado; se procedió a la calificación respectiva, obteniendo el siguiente resultado: APROBADA con la nota de 16 (Dieciséis) en la escala vigesimal, mención de BUENO.

Por lo que queda APTA para obtener el Título Profesional de ABOGADA, de acuerdo con la Ley Universitaria 30220 y la normatividad vigente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Siendo las 5:09 p.m., del mismo día, se da por concluido el acto académico tomando la juramentación respectiva y suscribiendo el Acta los miembros del jurado.

Lambayeque, viernes 15 de marzo del 2024


Dr. RAFAEL HERNANDEZ CANELO
Presidente del Jurado


Mag. LEOPOLDO YZQUIERDO HERNANDEZ
Secretario del Jurado

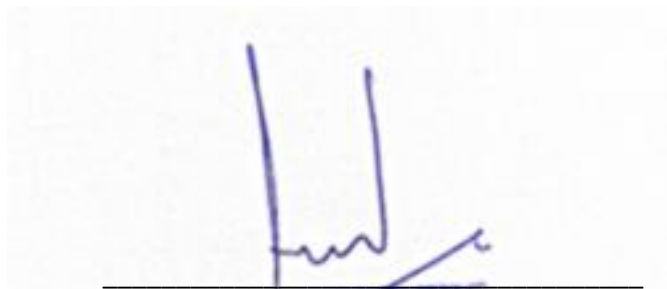

Mag. CESAR VARGAS RODRIGUEZ
Vocal del Jurado.

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, Dr. AMADOR NICOLAS MONDOÑEDO VALLE, Docente/ Asesor de tesis/ Revisor del trabajo de investigación de la bachiller en DERECHO Luz Eliana Ventura Pacheco, Titulada LA POLÍTICA PÚBLICA DE BIENESTAR FAMILIAR FRENTE A LA SATISFACCIÓN DE LOS ALIMENTOS DEL MENOR ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN, luego de la revisión exhaustiva del documento constato que la misma tiene un índice de similitud de 18% verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin.

El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

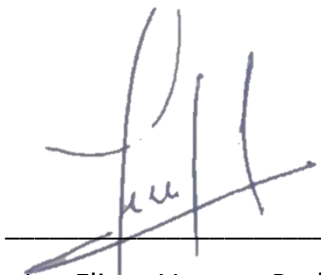
Lambayeque, 29 de setiembre del 2023



Dr. AMADOR NICOLAS MONDOÑEDO VALLE

DNI: 29270773

ASESOR



Bach. Luz Eliana Ventura Pacheco

DNI: 73369805

Autor

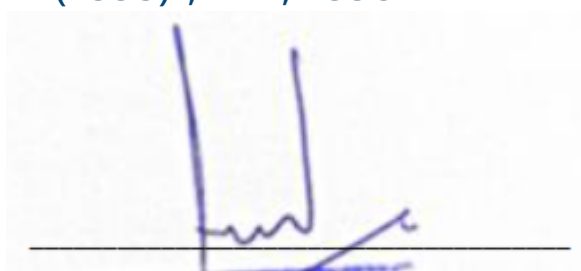
La política pública de bienestar familiar frente a la satisfacción de los alimentos del menor ante el incumplimiento de la obligación

INFORME DE ORIGINALIDAD

18%	17%	1%	2%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	repositorio.uss.edu.pe Fuente de Internet	8%
2	hdl.handle.net Fuente de Internet	4%
3	repositorio.unprg.edu.pe Fuente de Internet	2%
4	repositorio.unprg.edu.pe:8080 Fuente de Internet	1%
5	repositorio.unife.edu.pe Fuente de Internet	1%
6	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	<1%
7	repositorio.uladech.edu.pe Fuente de Internet	<1%
8	"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 11 (1995)", Brill, 1998	<1%



Dr. AMADOR NICOLAS MONDOÑEDO VALLE

DNI: 29270773

ASESOR

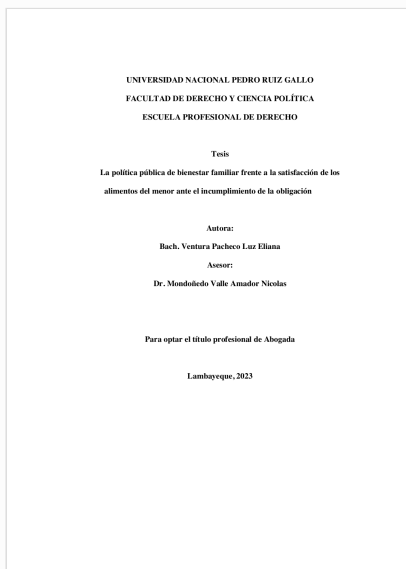


Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por **Turnitin**. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Luz Eliana Ventura Pacheco
Título del ejercicio: REVISIÓN DE TESIS
Título de la entrega: La política pública de bienestar familiar frente a la satisfacci...
Nombre del archivo: TESIS_VENTURA_PACHECO_LUZ.docx
Tamaño del archivo: 105.82K
Total páginas: 84
Total de palabras: 17,442
Total de caracteres: 92,938
Fecha de entrega: 29-sept.-2023 09:47a. m. (UTC-0500)
Identificador de la entre... 2180589573



Derechos de autor 2023 Turnitin. Todos los derechos reservados.

Dr. AMADOR NICOLAS MONDOÑEDO VALLE

DNI: 29270773

ASESOR

Índice general

Dedicatori	iii
Agradecimiento.....	iv
Índice general.....	v
Índice de tablas	viii
Resumen	ix
Abstract.....	x
Introducción.....	11
Capítulo I	15
Los aspectos metodológicos de la investigación	15
1.1. El planteamiento del problema	15
1.2. La formulación del problema.....	16
1.3. La justificación de la investigación.....	16
1.4. La importancia de la investigación	17
1.5. Los objetivos de la investigación.....	18
1.5.1. El objetivo general	18
1.5.2. Los objetivos específicos	18
1.6. La hipótesis de la investigación	18
1.7. Las variables de estudio	19
1.7.1. Sobre la variable independiente	19
1.7.2. Sobre la variable dependiente	19

1.8. Los métodos que se aplicaron en la investigación;**Error! Marcador no definido.**

Capítulo II.....	20
La política pública orientada a garantizar el bienestar familiar.....	20
2.1. Los trabajos previos a la investigación.....	20
2.2. La teoría del bienestar familiar como función del Estado	26
2.3. La función de las políticas públicas.....	28
2.4. La teoría del bienestar familiar en las políticas públicas.....	29
Capítulo III.....	31
La protección de los alimentos del menor ante el incumplimiento de la obligación	31
3.1. El carácter constitucional de los alimentos como derecho fundamental .	34
3.2. La protección de los alimentos del menor ante el incumplimiento de la obligación	35
3.3. La estructura legal comparada destinada a la obligación del cumplimiento ante la omisión del pago de alimentos.....	38
Capítulo IV	45
Análisis de los resultados.....	45
4.1. Unidad de análisis.....	45
4.2. Resultados obtenidos de la observación de casos judiciales sobre alimentos	46
Capítulo V.....	52

La contrastación de la hipótesis	52
5.1 La discusión de los resultados	52
5.1.1. Discusión del objetivo específico: “Estudiar los lineamientos de la política pública orientada a garantizar el bienestar familiar”	52
5.1.2. Discusión del objetivo específico: “Describir la base doctrinaria que justifica la protección de los alimentos del menor ante el incumplimiento de la obligación”	59
5.1.3. Discusión del objetivo específico: “Analizar los efectos de la política pública de garantía del bienestar familiar en la realidad de los procesos de alimentos en fase de ejecución en los juzgados de familia de la ciudad de Chiclayo”	65
5.2. Validación de las variables	70
5.2.1. Validación de la variable independiente: “Política pública orientada a garantizar el bienestar familiar”	70
5.2.2. Validación de la variable dependiente: “La satisfacción de los alimentos del menor ante el incumplimiento de la obligación”	72
5.3. Contrastación de la hipótesis	73
Determinación final de la tesis	73
Conclusiones.....	74
Recomendaciones	76
Bibliografía	78

Índice de tablas

Tabla 1: evaluación interpretativa de los expedientes de alimentos en el distrito judicial de Chiclayo.....	46
---	----

Resumen

Esta investigación ha tenido por finalidad determinar si la política pública orientada a garantizar el bienestar familiar resulta adecuada para lograr la satisfacción de los alimentos del menor ante el incumplimiento de la obligación, para lo cual se aplicó el método de la interpretación jurídica, ello bajo los tipos de exégesis e interpretación sistemática. Esta observación en base a la metodología jurídica ha permitido revisar la legislación que opera sobre el incumplimiento de la obligación alimentaria a fin de reconocer su origen, esto es la política pública que se orienta hacia la protección de la familia.

Como resultado se ha logrado verificar que no existe un nivel adecuado de satisfacción respecto de los alimentos que corresponde a los menores de edad, lo cual se vincula directamente con la regulación que se ocupa del incumplimiento, es decir que en los procesos de alimentos que se encuentran en ejecución, ante dicha situación, se deriva de manera directa hacia el Ministerio Público para su atención, lo cual no solo deriva la atención hacia otro ámbito jurídico, sino que también se convierte en un tránsito aletargado para la satisfacción del derecho alimentario.

Por tal razón es que se ha obtenido el razonamiento de que la necesidad social debe estar de la mano con la justificación jurídica de las reglas lo cual las estrategias públicas que orientan la legislación deben ser generadas en base al reconocimiento de la realidad social; para el caso estudiado, se precisa de que el enfoque de acción ante el incumplimiento de la obligación alimentaria deba estar influenciado por la necesidad alimentaria y no por el castigo a quien incumple.

Palabras clave: Política pública, Bienestar familiar, Alimentos, Incumplimiento de la obligación

Abstract

The purpose of this research was to determine if the public policy aimed at guaranteeing family well-being is adequate to achieve satisfaction of the child's maintenance in the event of non-compliance with the obligation, for which the method of legal interpretation was applied, under the types of exegesis and systematic interpretation. This observation based on the legal methodology has made it possible to review the legislation that operates on non-compliance with the maintenance obligation in order to recognize its origin, that is, the public policy that is oriented towards the protection of the family.

As a result, it has been possible to verify that there is not an adequate level of satisfaction regarding the food that corresponds to minors, which is directly linked to the regulation that deals with non-compliance, that is, in the food processes that are in execution, in this situation, it is referred directly to the Public Ministry for attention, which not only diverts attention to another legal area, but also becomes a lethargic transit for the satisfaction of the right to food.

For this reason, the reasoning has been obtained that the social need must go hand in hand with the legal justification of the rules, which means that the public strategies that guide the legislation must be generated based on the recognition of social reality; For the case studied, it is specified that the approach to action in the event of non-compliance with the maintenance obligation must be influenced by the nutritional need and not by the punishment of those who do not comply.

Keywords: Public policy, Family welfare, Food, Breach of obligation

Introducción

Esta tesis se ha nominado “La política pública de bienestar familiar frente a la satisfacción de los alimentos del menor ante el incumplimiento de la obligación” debido a que se observa en la realidad tanto jurídica como social una constante de insatisfacción del derecho alimentario de los menores de edad, ello en tanto que al producirse el incumplimiento de la obligación, no solo se está descatando el mandato judicial, sino que también se ralentiza y por ende limita el propio derecho que tiene el alimentista a recibir una pensión de manera efectiva.

Sobre este aspecto de la realidad es que se planteó un aspecto de análisis en la realidad jurídica, la misma que se vincula con el aspecto político de la organización estatal, en tanto que la organización de los poderes tal cual existe en el Perú, permite que se construya el ordenamiento jurídico partiendo del tronco legislativo que es la normativa constitucional. El respeto por los principios que inspiran las garantías constitucionales debe ser el referente no solo para la creación de las reglas, sino que también debe regentar el diseño de las estructuras procesales, por tal razón es que se debe cuidar de que las estrategias en base a las cuales se organiza el sistema de justicia y su legislación sean las más apropiadas.

La condición de idoneidad de la política pública puede ser leída en base a los efectos jurídicos que esta propicia; en tal sentido para el caso de la protección familiar que tiene su enlace con el derecho a la vida y por ende a los alimentos, se requiere que el enfoque sea dirigido a la necesidad de proteger adecuadamente la satisfacción de los alimentos del menor. Por ello es que la actividad política resulta

relevante en función a sus efectos para el desarrollo correcto de la normativa sobre el derecho de alimentos, esta cualidad debe enfocarse a la priorización del pago antes que a la intención del castigo, bajo el entendido caso de que la sanción no siempre tendrá un efecto preventivo sobre el ilícito.

Es en base a estas indicaciones que se han planteado los aspectos metodológicos de la investigación que conllevaron a la construcción del Primer Capítulo de la tesis, el cual incorpora a la formulación del problema: ¿Qué tan adecuada es la política pública orientada a garantizar el bienestar familiar para lograr la satisfacción de los alimentos del menor ante el incumplimiento de la obligación?

Dicho cuestionamiento, al iniciar la investigación ha tenido una respuesta a priori que se estableció de la siguiente manera: Se precisa de la adecuación de la política pública orientada a garantizar el bienestar familiar con el fin de conseguir la satisfacción de los alimentos del menor ante el incumplimiento de la obligación. Es justamente este planteamiento hipotético el que se ha logrado corroborar al final de la investigación como un supuesto válido.

Luego en el Segundo Capítulo se ha tenido en consideración el desarrollo de la primera meta de la tesis que fue establecer las bases que diseñan las políticas públicas, prestando especial atención al ámbito que se enfoca en la protección de la familia y que propende asegurar su bienestar, para lo cual se ha considerado una secuencia de investigaciones previas vinculadas con el tema de tesis, llegando con ello a reconocer el nivel de conocimiento que se ha vertido, en función a la eficacia

de la protección del derecho alimentario ante el incumplimiento de la obligación. Para tal fin se ha establecido además la función de la política pública como estrategia de Estado, siendo además considerada la particular posición estatal sobre la protección de los alimentos orientada hacia el bienestar de los menores en función a los alimentos que corresponde ser atendido ante el incumplimiento de dicha obligación.

También se puede observar en el desarrollo del Tercer Capítulo un diseño de análisis sobre la teoría que enfoca la protección de los alimentos como un elemento básico para garantizar la protección del bienestar familiar, teniendo en cuenta que se trata del desarrollo de una garantía constitucional, los alcances de la política pública deben estar centrados en cumplir con tales derechos, sobre todo en el diseño de la regulación normativa que se ocupa de todo el proceso desarrollado en el sistema de justicia.

Este desarrollo ha permitido establecer que no existe un cumplimiento adecuado del análisis estratégico que implicaría revisar la realidad social y jurídica en torno al problema, ello bajo la necesidad de reconocer cuáles son los factores que estarían impulsando el problema respecto al incumplimiento de la obligación alimentaria. Sobre esta base es que se ha diseñado la revisión de la realidad descrita en el Cuarto Capítulo de la investigación que se ocupa de la revisión de casos judicializados en los que interviene el ámbito penal para ocuparse del incumplimiento, verificando con ello la existencia de plazos excesivos, y dilatación de los pagos que perjudica de manera directa al menor alimentista.

Con todos estos resultados se ha logrado establecer en el marco del análisis un punto de partida para la discusión, la cual en el Quinto Capítulo destinado a la contrastación de la hipótesis se discute sobre cada una de las metas trazadas en la investigación, obteniendo con ello las posturas correspondientes, siendo en suma de ello que se logró establecer un parámetro de validez para aquellas variables que permitieron el inicio de la revisión problemática. Todo ello ha dado como resultado la determinación final de la tesis, así como la conclusión general y específicas que se plantean junto a las recomendaciones que muestran el resultado de la investigación.

La autora.

Capítulo I

Los aspectos metodológicos de la investigación

1.1.El planteamiento del problema

La realidad que se observa día a día en los juzgados de la ciudad de Chiclayo respecto a los procesos de alimentos que han alcanzado la fase de ejecución, es bastante común, en tanto que opera sobre ellos una suerte de coincidente estado de incumplimiento, tan es así que se refleja en el nivel de carga procesal que genera respecto a las liquidaciones de pensiones devengadas. Esta situación desde luego tiene un destino que será el traslado a la instancia penal para que se inicie la denuncia y proceso correspondiente por Omisión a la Asistencia Familiar, nivel jurídico que tiene por finalidad únicamente sancionar con una pena bajo la esperanza de que se produzca el arrepentimiento y se cumpla con alguna porción mínima de la obligación.

Si bien es cierto pueden alcanzarse niveles de cumplimiento, pero se da de una manera poco regular, lo que conlleva al razonamiento de que esta fase no se comporta como una medida adoptada por el Estado que sea lo suficientemente satisfactoria para satisfacer la necesidad de los alimentos que se constituyen como obligación mediante una sentencia en el ámbito civil. Precisamente ello permite reconocer que el problema tendría que solucionarse en la misma vía en que se genera la sentencia, así pues, se trataría de una situación de orden ejecutivo, que deberá tomar una senda de obligatoriedad de cumplimiento de los pagos por

alimentos, en función a la capacidad coercitiva y ejecutiva que tiene el magistrado que emite dicha resolución.

Por todo ello importa a esta investigación, observar la manera en que se comporta el proceso de alimentos respecto al incumplimiento, para evidenciar los factores que la política pública estatal no ha contemplado para lograr la satisfacción de los alimentos ordenados mediante sentencia judicial, a fin de establecer una propuesta que sugiera cambios estratégicos en la política pública, direccionados jurídicamente para que se incorpore una figura de cumplimiento de las obligaciones en dos niveles, el primero que se ocupa de la aplicación de medidas cautelares para salvaguardar la necesidad alimentaria y la segunda que ante la incapacidad económica del obligado, se sancione civilmente al cumplimiento de trabajos específicos que generen un ingreso temporal hasta cubrir el monto adeudado.

1.2.La formulación del problema

¿Qué tan adecuada es la política pública orientada a garantizar el bienestar familiar para lograr la satisfacción de los alimentos del menor ante el incumplimiento de la obligación?

1.3.La justificación de la investigación

Tal cual se ha señalado como parte inicial de la investigación, la intervención de las políticas públicas en el desarrollo social es trascendente para alcanzar su equilibrio; en tal sentido se aprecia la justificación de este análisis dada

la vinculación directa con el interés comunitario que requiere de la implementación de condiciones jurídicas que brinden seguridad. Tal es el caso de los alimentos y el esquema de protección que se ha diseñado mediante las políticas estatales y su derivación en las reglas jurídicas que marcan su secuencia.

Otro aspecto que permite ver la justificación de esta investigación es el aspecto legislativo, en tanto que según la observación del desarrollo legislativo que se ha propiciado en base a la garantía constitucional que ampara a los alimentos de los menores como un derecho fundamental, no resulta del todo suficiente. Esta determinación es de fácil verificación en tanto que la secuencia de que sigue el proceso de alimentos se controla de manera adecuada hasta la determinación del derecho, más en lo que corresponde a la ejecución de la sentencia no alcanza índices de satisfacción, puesto que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias ordenadas judicialmente son el común denominador de los casos.

1.4.La importancia de la investigación

Tal cual se puede apreciar de la construcción de las razones que justifican la investigación de este tema, es posible reconocer su nivel de importancia, ello en razón de los intereses sociales que se derivan de la protección que se dará en función al acomodo de las políticas públicas que propenden al bienestar familiar.

En virtud a ello es que se puede indicar que la importancia está en función al beneficio que se procura detallar como efecto de este análisis, así pues, el reconocimiento de los factores que estarían fallando en la actual política pública

sobre el derecho alimentario y su satisfacción, permitirá la sugerencia de cambios favorables para los deudos alimentarios.

1.5. Los objetivos de la investigación

1.5.1. El objetivo general

- Determinar si la política pública orientada a garantizar el bienestar familiar resulta adecuada para lograr la satisfacción de los alimentos del menor ante el incumplimiento de la obligación.

1.5.2. Los objetivos específicos

- Estudiar los lineamientos de la política pública orientada a garantizar el bienestar familiar
- Describir la base doctrinaria que justifica la protección de los alimentos del menor ante el incumplimiento de la obligación
- Analizar los efectos de la política pública de garantía del bienestar familiar en la realidad de los procesos de alimentos en fase de ejecución en los juzgados de familia de la ciudad de Chiclayo.

1.6. La hipótesis de la investigación

Se precisa de la adecuación de la política pública orientada a garantizar el bienestar familiar con el fin de conseguir la satisfacción de los alimentos del menor ante el incumplimiento de la obligación.

1.7. Las variables de estudio

1.7.1. Sobre la variable independiente

Política pública orientada a garantizar el bienestar familiar

1.7.2. Sobre la variable dependiente

La satisfacción de los alimentos del menor ante el incumplimiento de la obligación.

Capítulo II

La política pública orientada a garantizar el bienestar familiar

2.1. Los trabajos previos a la investigación

Se ha revisado la tesis de María Susana Chávez Montoya (2017), que lleva por título “La determinación de las pensiones de alimentos y los sistemas orientadores de cálculo”, presentada a la Universidad Ricardo Palma de Lima para obtener el título profesional de Abogada; de la cual se toma la siguiente conclusión:

“El Estado en su calidad de ente protector y junto con los jueces deben velar por defender la dignidad de los seres humanos y por la protección de estos. Dentro de nuestras leyes se establecen criterios tanto subjetivos como objetivos que ayudan al juez a orientar su decisión respecto de los procesos de alimentos, sin embargo, es la misma ley la que no establece otros criterios de ayuda que pueden ser usadas por los jueces como guías”. (Chávez, 2017, pág. 114)

¿Qué criterios subjetivos se reconocen en la estructura legislativa que se refiere a los alimentos?

Ante la indicación de la tesista citada existen dos tipos de criterios plasmados en la estructura legislativa sobre alimentos en el Perú, tanto los objetivos, así como los de tipo subjetivo, sobre estos últimos se entiende que son características o peculiaridades particulares de cada juzgador, en tanto que se le faculta a razonar en función a las máximas de su experiencia. Para el caso de la contemplación de estos criterios en la estructura legal sobre alimentos, no existe de una manera taxativa, sino que se dan como producto del razonamiento que hace el magistrado en tanto se orienta a la evaluación de la realidad.

Desde luego este tipo de criterios, al contener un aspecto subjetivo, esto es la valoración propia del magistrado, solo será válida si es que se acompaña de los lineamientos objetivos que taxativamente incorpora la ley. Mas bien lo que señala la tesista citada, estaría referido a la puntualización de aspectos materiales que debieran exigirse como parte de la evaluación, puesto que actualmente el análisis del juzgador se ubica sobre la condición de quien habrá de cumplir con la pensión alimenticia, mas no se establecen condiciones particulares a ser evaluadas, ni menos se indica como carácter obligatorio la revisión del nivel de necesidad de quien los solicita, pues bastará para este aspecto con la simple declaración o petición de los alimentos.

¿Qué otro tipo de criterio hace falta incorporar a la legislación de alimentos para ser usado por los jueces?

Tal cual se ha indicado, se precisan de criterios para la evaluación material de las condiciones en las que se presenta el pedido de alimentos, por lo cual hace falta que se incorpore un mecanismo de cálculo para la determinación del monto de la pensión de alimentos. No cabe duda que la intervención del razonamiento que se orienta hacia la determinación del monto pensionario, se realiza de acuerdo a la declaración corroborativa que pueda hacer el demandado, que ante su ausencia se procede a realizar un estimado sobre el supuesto de un ingreso mensual igual al mínimo vital.

¿Qué tan eficaz resulta la intervención estatal sobre la protección del derecho de alimentos ante el incumplimiento de la obligación?

Como tal, la intervención estatal se produce en función de las políticas públicas orientadas hacia la construcción normativa que permita solucionar la

existencia de problemas sociales de mayor urgencia. En tal sentido para el caso de alimentos como derecho que le corresponde a los menores de edad en tanto parte más vulnerable del grupo familiar, se ha creado un lineamiento de protección en la actividad estatal que proyecta un diseño legislativo que traslada a esta normativa el concepto garantista de protección familiar. En tal medida es que se aprecia una contemplación directa de los alimentos como una necesidad de urgente atención por parte de la gestión estatal, lo cual no ha logrado cubrir un aspecto importante, en razón de los niveles de incumplimiento de los mandatos judiciales que imponen el monto pensionario y su frecuencia de pago.

Se tiene además la investigación de José Luis Quispe Silva (2017) que lleva por título “El interés superior del niño frente al incumplimiento de la obligación alimentaria”, presentada a la universidad Científica del Perú en Loreto para obtener el título profesional de Abogado; de la cual se recoge la siguiente determinación:

“(…) Por tanto constituye un deber velar por la vigencia de los derechos del niño y la preferencia de sus intereses, resultando que ante cualquier situación en la que colisione o se vea en riesgo el Interés Superior del Niño, indudablemente, éste debe ser preferido antes que cualquier otro interés”. (Quispe, 2017, pág. 71)

¿Qué tan efectiva es la aplicación del principio de interés superior del niño en el campo de la satisfacción de los alimentos?

La contemplación del principio de interés superior del niño se ocupa de un conjunto de derechos que de manera específica busca proteger el bienestar de este tipo de sujetos vulnerables, pero que no obedece de manera directa a una política

pública estatal, sino mas bien al enfoque de cuidado que sugiere el derecho convencional para el desarrollo de la normativa interna de cada país. Es así que este principio amparado en los derechos humanos es incorporada como herramienta de protección que ha establecido La Convención sobre los derechos del niño, es por ello que se contempla en la normativa nacional, puesto que se ha incorporado literalmente en el artículo IX del Título preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, donde se indica su obligatoria aplicación, aún cuando no se especifica que derechos contempla.

En función a lo señalado, corresponde al Estado hacer un desarrollo legislativo que permita la consolidación de los beneficios que debiera otorgarse en función al principio de interés superior del niño. Esto se basa en la pauta normativa del desarrollo legislativo, que opera en tanto que los principios contemplados taxativamente en la regla deberán ser desarrollados adecuadamente para su ejecución y efectos de control.

Es posible que con lo indicado se pueda alcanzar un nivel de efectividad adecuado respecto a la protección integral del menor en referencia a sus alimentos, para evitar o controlar de manera más adecuada el fenómeno del incumplimiento de la obligación alimenticia.

También se ubicó la tesis de Mary Carlita Cueva Avendaño (2019), que lleva por título “Afectación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del demandante obligado, en el proceso de reducción de alimentos en los juzgados de Paz Letrado de Piura año 2016-2017”; presentada a la Universidad Nacional de

Piura para obtener el título profesional de Abogado; de la cual se ha recogido la siguiente conclusión:

“Existen otros mecanismos que tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de la pensión alimenticia, los cuales no limitan ni restringen el derecho a la tutela jurisdiccional del demandante, como son: la prohibición del obligado de ausentarse del país mientras no asegure el cumplimiento de la pensión alimenticia; el embargo de la remuneración del obligado; el proceso de omisión a la asistencia familiar; y, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos”. (Cueva, 2019, pág. 122)

¿qué tan posible es garantizar y materializar la pensión alimenticia en base a la tutela jurisdiccional?

La tutela jurisdiccional es todo derecho que tiene toda persona que se le haga justicia, siempre y cuando pretenda algo de otra, será atendida esta pretensión con un órgano jurisdiccional competente, a través de un proceso con garantías mínimas.

Hay diversos mecanismos legales que permiten que se garantice de manera efectiva e inmediata la subsistencia de los acreedores alimentarios legales, se entiende como tal a los menores alimentistas o aquellas personas a quienes la ley dispone la facultad de solicitar y exigir alimentos.

Como tal corresponde a la determinación de la tutela jurisdiccional efectiva, garantizar y salvaguardar un adecuado proceso, que permita de manera adecuada consolidar el derecho que se pretende proteger; para el caso de los alimentos será de aplicación en tanto los parámetros de acceso y control sobre su desarrollo, sea basado en el respeto de la normativa constitucional.

Según lo descrito por la investigación citada, se estaría enfocando el interés de protección desde un punto de vista procesalista, puesto que se ocupa del diseño de un adecuado esquema, en el mismo que se incorporan las herramientas que trasladen la intención de garantía hacia la ejecución de las pensiones alimentarias. Vale decir que la construcción de esta norma permite establecer una concepción real del concepto

En el ámbito internacional se ha considerado la investigación de Ignacio Aparicio Carol (2018) que lleva por título “Análisis práctico de la pensión alimenticia de los hijos en el actual código civil español: posibles soluciones para los pleitos de familia”, presentada a la Universidad Complutense de Madrid en España, para optar el grado de Doctor en Derecho; de la cual se ha extraído la siguiente conclusión:

“Un mayor impulso de la mediación puede contribuir a resolver los continuos problemas que surgen en torno a la reclamación de la pensión de alimentos, pues el empleo de técnicas de negociación que eviten el enfrentamiento entre las partes no solo puede reducir la litigiosidad familiar, sino que también ayudaría a solucionar el principal problema del sistema judicial español, que a veces lo hace absolutamente ineficaz y que no es otro que la saturación de juzgados y tribunales”. (Ignacio, 2018, pág. 396)

¿Qué otros medios alternativos pueden dar la solución de conflictos a fin de que el cumplimiento alimentario sea voluntario?

Para resolver los diversos conflictos que surgen al abordar la pretensión de reclamación de alimentos y dar soluciones eficientes, es necesario tener en cuenta que la mediación es un instrumento indispensable para dar solución a esta disputa

que surge entorno a la pensión alimentaria como es el caso que se da en la legislación española, lo cual posibilita, faculta y evita vastos gastos, sin embargo la mediación supone una solución estructural a la principal problemática de la justicia que no es otra cosa que la saturación de tribunales y juzgados

Sin embargo, una solución eficiente es el dialogo y llegar un acuerdo con los padres progenitores, y así ellos pueden llegar a un acuerdo que permita garantizar y salvaguardar el bienestar del niño. Esta circunstancia no sería posible si es que no se advierte antes la condición volitiva para el cumplimiento, puesto que las reglas creadas para tal fin se orientan más hacia las cuestiones objetivas y se aplican de tal manera.

2.2. La teoría del bienestar familiar como función del Estado

En relación a lo que se ha planteado en el título de este capítulo, el ejercicio de control que debe ejercer el Estado se refleja en las políticas públicas que desarrolla durante la gestión, esta idea es la que conlleva a razonar sobre un elemento de necesidad social, que para el caso de la investigación se asume como el bienestar.

Este bienestar en términos generales debe ser comprendido como la función estatal de generar los medios que permitan establecer un ámbito de protección, el mismo que comprende no solo los lineamientos de la política pública, sino también un esquema jurídico adecuado. Es de notar que, el sentido de protección que se propicie en el ordenamiento jurídico para otorgar bienestar deba basarse en el

cuidado del ser, ello en tanto que la normativa constitucional tiene como eje principal de protección al hombre como sujeto de derecho.

Las condiciones en que se configura en la Constitución dicho esquema de protección tienen su fundamento en el bienestar social, el mismo que se comprende como aquel: “(...) conjunto de factores que participan en la calidad de la vida de la persona y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que den lugar a la tranquilidad y satisfacción humana”. (Duarte & Jimenez, 2007, pág. 306)

Como tal se indica en la cita anterior, se trata de satisfacer necesidades que le corresponde al ser por su propia naturaleza, desde luego según el enfoque constitucional se orientará siempre a la condición de dignidad del ser. Esta protección como todo elemento que constituye derecho, siempre ha de tener un límite, que en el ordenamiento constitucional suele plasmarse en función a los deberes u obligaciones que le corresponden a cada sujeto.

De acuerdo a ello como garantía que le asiste a cada sujeto de derecho de manera particular, se puede asumir la base o fundamento que conlleva a reconocer también la protección que se le debe otorgar a la familia, siendo esta integrada por varios sujetos que son pasibles de protección. Otro de los fundamentos es la función que cumple la familia en el esquema de la sociedad, que en tanto célula básica de la misma debe asegurarse su bienestar y perdurabilidad.

2.3. La función de las políticas públicas

La actividad que debe cumplir una organización estatal supone la generación de un resultado, este será el bienestar de la sociedad que gobierna, por lo mismo que interesa conocer de que manera se plasma la estrategia para alcanzar tal fin, es así que las políticas públicas que organiza la gestión estatal cumplen un papel fundamental en dicha labor.

Por tal razón es importante en primer lugar reconocer el concepto que se tiene sobre este tipo de estrategias, así pues, se indica como una: “labor –primordial, podríamos decir– que lleva a cabo todo Estado o gobierno en pos de concretar alguna transformación social. Tal es su relevancia que, según lo expresado por varios autores, ese cúmulo de acciones que se ponen en marcha tiene como finalidad atender y/o dar solución a las demandas requeridas por un sector de la ciudadanía”. (Wilson, 2018, pág. 32)

Como se puede apreciar la construcción conceptual que se da sobre las políticas públicas apuntan a un razonamiento que enlaza a la sociedad con la gestión estatal; vale decir que será el gobierno el que ejecute acciones específicas frente a la advertencia de necesidades que son reclamadas por la sociedad en general o por un grupo en específico a fin de solucionar sus más urgentes problemas.

De acuerdo con ello es que se puede indicar que existe una finalidad puntual de las políticas públicas que se orienta a la satisfacción de necesidades urgentes, ello incorpora aspecto como la resolución de la problemática pública que se pueda presentar en diversos sectores de la población, la condición de solución de

problemas de corte netamente social, para tal fin se precisa el reconocimiento puntual de la realidad social e identificación de los factores que provocan el desequilibrio.

2.4. La teoría del bienestar familiar en las políticas públicas

En función al enfoque de la investigación planteada se debe tener en cuenta como eje principal a las políticas públicas que se han diseñado con el fin de establecer lineamientos estratégicos que conlleven a un adecuado nivel de control y protección que ejerce el Estado mediante la gestión que desarrolla sobre el bienestar social. En principio debe asumirse la existencia de políticas sociales y luego en base a ello la presencia de las que se ocupan de la política orientada al bienestar familiar.

En tal sentido se debe asumir la construcción de estas políticas de acuerdo a las situaciones en la que se presentan las familias en el entorno social, así pues “El develamiento de la diversidad familiar debe constituirse en la línea base para la construcción de políticas públicas de familia, integrales, seculares, incluyentes y de reconocimiento de los derechos”. (Franco & Sánchez, 2008, pág. 89)

Así las cosas, el sentido que deben adoptar las políticas públicas siempre ha de estar en constante cambio, lo cual se desprende de la manera en que se desarrolla el grupo social. Esta situación solo puede ser advertida mediante el estudio científico permanente y consciente en razón de la situación social, lo cual conlleva a que esta política “(...) tenga puentes de conexión que impliquen el reconocimiento de individualidades en las colectividades y recobre la colectividad

en sus necesidades, en su historia, en su contexto y las posibilidades de cambio, apropiándose de manera crítica sobre los intereses de los gobiernos”. (Pinillos, 2020, pág. 99)

Sin duda alguna esta construcción estratégica debe plantearse además del reconocimiento de las necesidades, en las pautas que se derivan del derecho convencional así se tiene que “(...) los poderes públicos, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, promuevan reformas legislativas y adopten medidas que materialicen las 100 Reglas de Brasilia, poniendo en el centro de sus atenciones a los hijos y las hijas menores de edad de personas privadas de la libertad, además de sus familias”. (Camacho, Jaramillo, Bustos, & García, 2021, pág. 134)

Capítulo III

La protección de los alimentos del menor ante el incumplimiento de la obligación

La función del derecho siempre habrá de comprenderse como una pauta de control dirigida hacia la actividad que desarrollan los miembros de una sociedad, por lo mismo que se divide en diversos ámbitos, en cada uno de ellos lo que se procura es plantear una secuencia de pautas para asegurar la protección de los seres humanos, ello en tanto que desde el eje normativo constitucional se percibe la responsabilidad del Estado como la protección de los ciudadanos, bajo el entendido caso de que su perspectiva es antropológica. Partiendo de ello es que se puede vincular esta protección con la protección de la familia como la agrupación más básica dentro de la sociedad y que precisamente es aquella que le dará el sentido y asegura su existencia a través del tiempo. (Chávez, 2017)

En ese plano de protección que vincula la actividad estatal y la familia para asegurar su rol social, se encuentran las reglas que para el caso de las familias no solo resulta suficiente el establecimiento de los lazos parentales o la concepción de la familia como tal, es mucho más que eso, en tanto que se precisa de la indicación de un esquema normativo que determina tanto las potestades como derechos y las consecuentes exigencias que pauta la obligación que le corresponde a quienes integran esta célula básica social. Es así que se ubica el derecho alimentario que como obligaciones se enfoca a la función no solo de quienes engendran hacia sus descendientes, pues pasa por la obligación asistencial que figura como regla entre los cónyuges en la relación familiar, llegando a establecerse incluso entre quienes

se vinculan bajo las reglas de ascendencia y descendencia incluyendo a los hermanos.

Bajo tal comprensión obligacional respecto a los alimentos, se ha producido como pauta general la protección de quienes deben recibir este beneficio en aras de su bienestar, sobre todo en el ámbito familiar se ha concentrado en la obligación que aplica sobre los menores de edad que son producto de la relación familiar, es así que toda la regulación se enfoca en dicho cumplimiento, pero la realidad jurisdiccional permite ver que la situación es distinta a las expectativas de bienestar que se proyecta legalmente. Por tal razón es que se aprecia una justificación de mayor intervención estatal, que como tal se ha orientado hacia la construcción de reglas destinadas a impulsar el cumplimiento de la obligación.

Esta línea de acción invitó a la configuración de pautas legales como es el caso de la determinación de dicha obligación como un mandato contenido en una sentencia, lo cual se obtiene como resultado de un proceso judicial a fin de establecer no solo la obligación existente sino también señalar la forma en que se habrá de cumplir tal orden, esto es la cuantificación de la obligación a través de la pensión que se convierte en una imposición a fin de asegurar el bienestar del menor. Como toda cuestión obligada siempre tendrá dificultades en el cumplimiento de la misma, por lo general cuestiones económicas que no necesariamente se establecen como una secuencia de orden lógico, pero que si reflejan una realidad social atendible.

Independientemente de esta situación social determinada por otros factores, lo que interesa a esta investigación es la pauta que se ha creado para regular o

controlar las acciones omisivas respecto a la obligación ya ordenada judicialmente, puesto que resulta prudente entender que el derecho y la obligación existen de manera previa a cualquier sentencia que conmina al cumplimiento de las pensiones alimenticias; pero la realidad de incumplimiento de estas exigencias judiciales es lo que despierta la atención, puesto que se direccionan hacia un ámbito que describe más un castigo antes que la búsqueda del cumplimiento, esto es entendido tal vez como la posibilidad de lograr que se cumpla el pago mediante la coacción.

Como tal, la política pública orientada a la protección social destinada luego a la familia como elemento esencial de la sociedad, buscó la mejor manera de establecer un mecanismo que permita exigir de manera pronta el cumplimiento de la obligación, es así como surge la omisión a la asistencia familiar como parte de un esquema penal para propiciar el fin esperado sobre la necesidad del alimentista, esa pauta se establece en el numeral 149 del ordenamiento punitivo peruano.

Es justamente el efecto que surte este tipo de intervención estatal sobre la necesidad de que se cumplan los pagos de las pensiones alimentistas lo que motiva una parte de esta investigación, por lo mismo que se hace necesario un repaso de la perspectiva de la propia percepción de esta garantía, que desde luego la condición fundamental conlleva a que sea de exigencia de la política pública. Desde luego bien se conoce que la acción estatal no tendrá injerencia en voluntades directas como las que corresponde al obligado, pero si puede crear un espacio jurídico adecuado para alcanzar efectividad en las reglas que se supone procuran protección.

3.1. El carácter constitucional de los alimentos como derecho fundamental

Tal cual se conoce el sentido de protección que corresponde a los alimentos se vincula con la necesidad de garantizar el bienestar del sujeto de derecho como parte de la sociedad; esto es que por su condición de ser les corresponde el derecho a los alimentos lo cual se contempla en el ordenamiento constitucional a fin de plasmar su total garantía. Tal obligación se centra en el bienestar del individuo con la intención de asegurar la supervivencia de este, por lo cual se traslada el razonamiento hacia el ámbito de protección del derecho a la vida.

Como se puede apreciar se trata de un interés que corresponde no solo a la mirada de los derechos individuales sino también a la construcción de un esquema social, esto conmina la protección general de todos los individuos que integran la sociedad para lograr la supervivencia no solo del ser sino también de la sociedad en pleno. En función a ello se ha señalado que resulta ser “(...) de orden e interés público; de allí que el estado, por medio de sus organismos, ministerio e instituciones con estos fines, tome la defensa y asistencia de las madres y niños abandonados”. (Jarrín, 2019, pág. 47)

Teóricamente se concibe a los alimentos bajo un carácter fundamental que otorga la normativa constitucional por lo mismo que se produce en función a ello un desarrollo legislativo que se manifiesta de manera taxativa en el cuerpo de reglas civiles que establecen una secuencia de prelación respecto a quienes tienen la obligación de cumplir con dicha prestación con el fin de brindar bienestar al beneficiario, que para el caso de los menores debe hacerse en función al control principista del interés superior del niño. (Vinelli & Sifuentes, 2019)

El carácter subjetivo del derecho alimentario

Se ha de comprender bajo este concepto que el derecho de los alimentos se remite a una condición subjetiva, lo que permite reconocer diferentes aspectos relacionado con las condiciones de la normativa constitucional; así se presentan también aspectos relacionados con la percepción empírica de los alimentos, esto último se relaciona con la sensación del hambre, así como la desnutrición que se presenta como un elemento de la sociedad. Entre tanto el concepto normativo de los alimentos como derechos lo presenta dimensionado en razón de condiciones filosóficas y políticas que permiten reconocerlo como tal y que propende a que sea protegido jurídicamente de una manera eficiente. (Restrepo, 2009)

3.2. La protección de los alimentos del menor ante el incumplimiento de la obligación

La protección que se presume debe estar garantizada no solo por las reglas constitucionales que se establecen como pauta originaria del derecho de los alimentos, sino también por la estructura de control que ofrece el Estado mediante las políticas públicas, no es del todo adecuada. Esta realidad sobre todo se ha evidenciado en el periodo de emergencia que a nivel mundial ha tocado experimentar.

El tema sobre el incumplimiento de la obligación alimentaria, como ya se ha indicado anteriormente se plasma de manera legislativa mediante una sanción que recoge la estructura de reglas punitivas peruanas que en su numeral 149

sanciona tal omisión; indica además que para que se constituya el mismo se exige un elemento de procedencia a fin de ejercer las acciones penales, esto es que se establezca de manera previa una decisión que conmina a la obligación a un determinado sujeto, esto es a través de un documento judicial que haya adquirido firmeza en su mandato.

Es por tal razón que incluso la percepción jurisprudencial en torno a esta discusión señala como carácter trascendental la necesidad de revisar si es que el obligado ha recibido de manera acreditada la indicación que lo apercibe de manera expresa, esto es que se le haya notificado para que acuda a la instancia penal si es que no alcanza a cumplir con los pagos. Para tal fin se le otorga un plazo razonable de tres días a fin de evitar que se produzca el traslado de la documentación pertinente para el área penal del sistema de justicia y hacer efectiva la denuncia en su contra por dicho incumplimiento. (Huallpa, Laqui, Pumahualcca, Ticona, & Quispe, 2019)

Tal situación ha tenido efectos sobre el tratamiento de los alimentos de los menores, así pues “(...) el confinamiento y la crisis económica afectaron aún más su ya escaso cumplimiento y, a la vez, se carece de mecanismos de protección social efectivos e incluyentes. Se trata de países que tienen, además, niveles de informalidad laboral muy altos”. (Martínez & Gonzales, 2021, pág. 115)

Como se advierte la participación del Estado cumple un papel primordial para fortalecer el índice de cumplimiento, que se entiende debe ser una tarea complementaria de otras actividades de control así pues ello debe incluir “(...) la

concesión de ayudas públicas que, de alguna manera, compensen los trabajos realizados por el cuidador no profesional en el entorno familiar va a requerir una buena dosis de reflexión, para conseguir un resultado de protección equilibrado donde se eviten situaciones injustas para todos los afectados por una situación de necesidad”. (Mondéjar, 2016, pág. 185)

Las condiciones tanto sociales como familiares en las que se produce el incumplimiento de las obligaciones alimentarias sin duda son de interés para este tipo de análisis, puesto que la perspectiva de crecimiento demográfico tiene injerencia en este asunto, dado que se aprecia diversidad de familias donde existen padres con muchos hijos lo cual forma un panorama de insuficiencia para poder cubrir económicamente la necesidad de todos a la vez. Desde luego no debe asumirse como una justificación, pero si como un factor que agrava el incumplimiento afectando las condiciones de vida familiar y de manera individual del menor a quien le corresponde recibir los alimentos. (Calva & Montalvo, 2021)

La forma en que se percibe esta omisión que se traduce en incumplimiento de las obligaciones que corresponden a los alimentos, debe asumir un ámbito más amplio en cuanto a la aplicación de medidas que consolide una adecuada satisfacción del derecho alimentario, esto precisamente se convierte en una cuestión problemática que se da en cualquier nivel de la sociedad, desde luego que se produce con mayor incidencia en los estratos vinculados con la pobreza. Las acciones tomadas mediante la creación del tipo penal de omisión a la asistencia familiar tiene un efecto adecuado en cuanto a la aplicación de sanciones, pero no siempre resulta adecuado respecto a la satisfacción de las necesidades del

alimentista, lo cual se debe a que el Derecho Penal únicamente sanciona, si puede tener un efecto preventivo, pero resulta de carácter residual.

Por tal razón es que se percibe la acción protectora de los derechos de alimentistas un tanto débil en razón de que no se consolida un elemento de efectividad sobre la verdadera necesidad de bienestar que se supone tiene por función la pensión otorgada. Siendo así, lo más prudente resulta tomar medidas iniciales relacionadas en primer lugar con la educación, puesto que parte de los factores que promueven este tipo de delitos se vincula con los bajos índices de conocimiento sobre tal realidad social, además de las condiciones económicas que atraviesan que por alguna razón se decantan en explosión demográfica lo cual hace difícil establecer un mecanismo de control, esta pauta estratégica debería evaluarse en función a proyecciones sobre los efectos que promovería a fin de establecer la ruta más adecuada para implementar una política pública correcta sobre la protección de los menores.

3.3. La estructura legal comparada destinada a la obligación del cumplimiento ante la omisión del pago de alimentos

La obligación estatal como estructura de control social, implica la realización de actividades que permitan satisfacer las necesidades de la población, sobre todo las más trascendentales que por su nivel de vulnerabilidad requieren de mayor atención. Tal es el caso de la protección familiar, la cual incorpora a los alimentos como parte incluso de la garantía del bienestar que se desprende del

derecho a la vida, nivel de importancia que precisa de un adecuado manejo de la estructura legislativa para alcanzar eficacia.

Esta situación presenta un punto específico como problema, que se traslada al campo de la ejecución de la obligación alimentaria, incluso luego de la intervención de la justicia para establecer el monto y forma de pago de las pensiones; esta acción que se presume otorga la garantía de cumplimiento de las pensiones, tal cual debiera ser asumida, no cumple con satisfacer la necesidad, incluso luego de la participación de la coerción, puesto que la realidad no se condice con el parámetro de obligatoriedad. Más aún dicha intervención como coacción estatal alcanza una solución a largo plazo, lo cual se convierte en una afectación a las necesidades urgentes de los menores.

En función a lo planteado sobre la estructura legal generada para proteger al menor ante el incumplimiento corresponde analizar la efectividad de los procesos de omisión a la asistencia familiar orientado en base al tipo penal que lo sanciona, corresponde desarrollar la descripción de su naturaleza jurídica con el fin de poder ubicar su comprensión en el acervo jurídico.

En ese sentido, teniendo en cuenta que en lo que corresponde a los tipos penales, para poder comprender su naturaleza jurídica es preciso reconocer el bien jurídico que protege, así en lo que corresponde a la tipificación comprendida en el artículo ciento cuarenta y nueve del Código penal, se presenta desde una perspectiva lógica de comprensión la garantía de la manutención.

Ello se puede corroborar de lo mencionado por Salinas, quien indica que, respecto a este delito, es el deber de que aquello que se comprende como asistencia, es decir la obligación del auxilio o lo que se entiende como el socorro de la víctima o en este caso de quien requiere de los alimentos (Salinas Siccha, 2008).

De lo citado se puede entender que el autor hace referencia al deber que tiene el padre respecto a su hijo alimentista, que en tanto a este último se le considera un sujeto con necesidades de manutención que corresponden ser atendidas a fin de garantizar la subsistencia del mismo; siendo que la ausencia de ello se convierte en la contravención de un derecho fundamental y en tanto ello sucede el Derecho Penal acude a la sanción correspondiente.

Muchas acepciones coincidentes sobre este aspecto particular en lo que se refiere al bien jurídico, se pueden ubicar en la búsqueda de doctrina, así como por ejemplo lo señalado por Peña que se refiere al bien como objeto de protección, describiéndolo como aquella integridad que corresponde a todo el grupo familiar, respecto a su estabilidad, precisamente en el punto en que el agente que estaba obligado no cubre con tales requerimientos básicos (Peña Cabrera, 2011).

Es de apreciar que existe una especie de consenso en lo que se refiere al objeto de protección o bien jurídico, según se quiera comprender, cuando se configura el tipo penal de omisión respecto a lo que se refiere a la asistencia familiar, siendo lo más importante de destacar dos elementos, la necesidad y el deber de protección, ante cuya ausencia se castiga imponiendo una sanción. En ese

sentido es claro el hecho de que la acción que ejerce el derecho penal a través de este tipo se orienta como un reproche debido al incumplimiento de dicho deber.

Luego de lo referenciado corresponde enfocar el desarrollo de esta sección sobre el tipo penal estudiado, hacia el nivel de eficacia que resulta de su aplicación, qué duda cabe sobre el hecho de que es lo observable, pues teniendo en cuenta que se trata del ámbito penal, el primer nivel de análisis corresponderá a la efectividad del tipo que busca otorgar protección en base a la sanción, así, se tendría que verificar las cantidades de casos en los que se impuso la pena y cuantos otros ni siquiera ha prosperado.

Tal cual se ve existe un encadenamiento lógico con un proceso previo, pues se consigna como objeto del incumplimiento del deber de prestar la alimentación que ordena la sentencia civil emitida judicialmente, el caso se refiere a la sentencia que declara tal mandato, el desentendimiento o cual fuera la causa que origina la ausencia de cumplimiento se convierte en la razón de aplicar una sanción penal.

Dicho castigo requiere de una justificación, así es que se recurre al planteamiento recogido de la doctora en derecho López (2014) quien señala que se ha considerar al sujeto como un infractor o responsable del delito desde muchos otros puntos de vista, es decir no debe realizarse como única y exclusiva perspectiva a la dogmática que corresponde al área jurídico-penal, debiendo tener en cuenta los parámetros establecidos por la ciencia criminológica que reconoce al agente delictivo como aquel personaje que tiene una característica personal con desviaciones o trastornos de ese corte, pero también lo considera como aquel sujeto

que puede ser tratado para generar en el algún cambio de parecer que ser refleje en su actuar. (Lopez Melero, 2014)

Es de notar que las posturas teóricas, cada una en su campo buscan bajo su tratamiento un acondicionamiento del sujeto que ha cometido la acción antijurídica, una de ellas que corresponde a la aplicación de la pena como una sanción como algo que interviene con la intención de generar garantías de estabilidad social, que puede considerarse como una cuestión preventiva del delito esto en cuanto se refiere a las acciones futuras que pudiera cometer el agente, ello con la intención de prevenir de una manera que se entiende como especial, mientras que de otro lado se puede evidencia una de carácter general. Las posturas que se incorporan en la filosofía jurídica permiten reconocer este interés como válido, considerando como apropiada la persecución, ello ha de concebirse como un castigo en base a la moralidad que reviste esta acción y en función a la cual se sanciona al sujeto.

Si bien es cierto que la apreciación otorgada por la autora citada es bastante general, aún así resulta útil para entender la razón de ser de una sanción, la misma que se ocupa de la protección social, lo cual en realidad opera con mayor fuerza en tanto el daño se constituye como una acción realmente grave, lo cual ya tiene que ver con el principio que limita la intervención de la ciencia de las penas, lo cual se considera como la última ratio; pese a ello es evidente que en razón a la persecución se sanciona penalmente a la acción del incumplimiento de la prestación e alimentos con una pena que no supera los tres años, por lo mismo que no resulta de aplicación efectiva.

Llama poderosamente la atención lo dicho por la doctora citada el hecho de que las sanciones penales acuden no sólo a la protección de la sociedad para evitar actos futuros de igual magnitud, sino que justifica la sanción en base a una concepción moral del asunto, es decir que para el caso estudiado sería una cuestión más de contexto moral puesto que la connotación social y cultural implica entender que el padre es el responsable de la manutención de sus hijos y moralmente está obligado a cumplir con tal deber, por lo mismo que le corresponde un justo castigo por esta omisión.

De este modo es que la persecución penal del incumplimiento de la obligación de alimentos, se regula con la Ley N° 13906 titulada Ley de abandono de Familia, la misma que ha sido retirada del esquema del ordenamiento legal, mientras tanto el ordenamiento sustantivo sanciona el desconocimiento respecto a la obligación depende del establecimiento de la orden mediante la existencia de un documento que es la sentencia, esto constituye un asunto relacionado como de aspecto económico pero que tiene vínculo con la naturaleza de los derechos que ante su ausencia pone en riesgo la supervivencia de un ser humano.

Existen distintas objeciones sobre la persecución penal del incumplimiento de la obligación de alimentos, es así que (Reyna Alfaro, 2017) menciona que una de sus críticas se refiere a la desnaturalización en función al aspecto económico que quizá no encuentra el vínculo con un derecho moral.

Sin embargo el razonamiento mencionado lo critica por Bernal (1997), que la persecución penal del incumplimiento de la obligación de alimentos está

producida en función a la protección de un objeto muy valioso, referida a la célula básica de la sociedad, cuyos intereses dependen de las garantías que procura el Estado para tal fin, ya que la obligación no sólo requiere del mantenimiento a través de una cantidad dineraria, sino que también requiere de la atención de otros aspectos que son importantes para asegurar el bienestar psicológico, moral que componen en general la integridad del menor lo cual da argumento a tal cuestionamiento. (Bernal Del Castillo, 1997)

Capítulo IV

Análisis de los resultados

4.1. Unidad de análisis

Según lo planteado como objeto de esta investigación se proyectó a determinar si la política pública orientada a garantizar el bienestar familiar resulta adecuada para lograr la satisfacción de los alimentos del menor ante el incumplimiento de la obligación. Por lo mismo que la unidad de análisis que se plantea, conlleva a la revisión de procesos judiciales en torno a los alimentos de menores de edad, para reconocer si se produce de manera adecuada el cumplimiento de la obligación.

En tal sentido se consideró como población de esta unidad de análisis a los casos judiciales de alimentos desarrollados en los juzgados de familia y paz letrado de la ciudad de Chiclayo; siendo así, la muestra se ha establecido bajo el número de 10 casos de alimentos en los juzgados de Familia y 10 casos en los juzgados de Paz Letrado. Ello con la intención de reconocer el nivel de cumplimiento de la obligación de alimentos para vincularla con la acción estatal que promueve estrategias para lograr efectividad en la satisfacción alimentaria mediante la intervención del sistema de justicia.

4.2. Resultados obtenidos de la observación de casos judiciales sobre alimentos

Tabla 1: evaluación interpretativa de los expedientes de alimentos en el distrito judicial de Chiclayo

No Expediente	Oficio al Ministerio Público	Monto de Liquidación	Depósito de cancelación de liquidación
Exp	Si hay más de un oficio se hace lista	Se hace coincidir con la lista de los oficios	Se hace coincidir con la lista de liquidación
3878-2017-0-1708-JP-FC-01	OFICIO:3878-2017-0-1708-JP-FC-01/RN Fechas: 16-01-2019 04-11-2021 20-12-2022	S/6,394.97	Hubo 02 depósitos con una suma total de S/ 2,300.00
04841-2017-0-1708-JP-FC-01	OFICIO:4841-2017-0-1708-JP-FC-01/RN-DD Fecha: 24-11-2022	S/1,160.21	No hubo depósitos desde admitida la demanda
05658-2017-0-1708-JP-FC-01	OFICIO: 5658 -2017-0-1708-JP-FC-01/RN-DD Fecha:	S/ 2,565.67	No hubo depósitos desde

	13-03-2022		admitida la demanda -
4869-2017-0- 1708-JP-FC-01	OFICIO: 4869-2017-0- 1708-JP-FC -01/RN-DD Fecha: 09-11-2022	S/ 7.032.78	Hubo 02 depósitos con una suma total de S/ 4 829.49
00021-2017-0- 1708-JP-FC-01	OFICIO: 21-2017-0- 1708-JP-FC -01/RN-DD Fechas: 02-02-2018 11-12-2918 19-05-2022	S/ 6,971.94	Hubo 02 depósitos con una suma total de S/ 700.00
04625-2018-0- 1708-JP-FC-01	OFICIO: 04625-2018-0- 1708-JP-FC -01/RN-DD Fechas: 08/06/2022 11/03/2022	S/ 2,669.51	No hubo depósitos desde admitida la demanda
05350-2018-0- 1708-JP-FC-01	OFICIO: 5350-2018-0- 1708-JP-FC-01/RN-DD Fecha: 27/10/2022	S/7,097.34	- No hubo depósitos desde

			admitida la demanda
01163-2018-0- 1708-JP-FC-01	OFICIO: 1163-2018-0- 1708-JP-FC-01/RN-DD Fecha: 02/11/2022	S/7,697.86)	No hubo depósitos desde admitida la demanda
01004-2018-0- 1708-JP-FC-01	OFICIO: 1004-2018-0- 1004-JP-FC-01/RN-DD Fecha: 19/09/2022	S/14,656.96	No hubo depósitos desde admitida la demanda
00192-2018-0- 1714-JP-FC-01	OFICIO: 192 -2018-0- 1708-JP-FC-01/RN-DD Fecha: 01/09/2022	S/19,220.14	Hubo 04 depósitos con una suma total de S/ 13,000.00
03095-2018-0- 1708-JP-FC-01	OFICIO: 3095-2018-0- 1708-JP-FC-01/RN-DD Fecha: 11/07/2022	S/ 9,519.56	No hubo depósitos desde admitida la demanda

01726-2018-0- 1708-JP-FC-01	OFICIO: 1726-2018-0- 1708-JP-FC-01/RN-DD Fecha: 08/03/2022	S/ 4,012.93	No hubo depósitos desde admitida la demanda
05609-2018-0- 1708-JP-FC-01	OFICIO: 5609-2018-0- 1708-JP-FC-01/RN-DD Fecha: 18/01/2023	S/14,925.27	No hubo depósitos desde admitida la demanda
05350-2018-0- 1708-JP-FC-01	OFICIO: 5350-2018-0- 1708-JP-FC-01/RN-DD Fecha: 12/09/2022	S/7,097.34	No hubo depósitos desde admitida la demanda
05738-2018-0- 1708-JP-FC-01	OFICIO: 5738-2018-0- 1708-JP-FC-01/RN-DD Fecha: 05/12/2022	S/7,640.32	No hubo depósitos desde admitida la demanda
	OFICIO: 1333-2018-0- 1708-JP-FC-01/RN-DD		

01333-2018-0- 1708-JP-FC-01	Fecha: 21/08/2022	S/. 4,767.76	No hubo depósitos desde admitida la demanda
00859-2018-0- 1708-JP-FC-01	OFICIO: 859-2018-0-1708-JP-FC-01/RN-DD Fecha: 08/07/2019	S/.3, 026.56	No hubo depósitos desde admitida la demanda
00847-2019-0- 1708-JP-FC-01	OFICIO: 847-2019-0-1708-JP-FC-01/RN-DD Fecha: 26/10/2022	S/14,347.10	No hubo depósitos desde admitida la demanda
02601-2019-0- 1708-JP-FC-01	OFICIO: 2601-2019-0-1708-JP-FC-01/RN-DD Fecha: 27/07/2022	S/5,559.29	No hubo depósitos desde admitida la demanda
00807-2020-0- 1708-JP-FC-01	OFICIO: 807-2020-0-1708-JP-FC-01/RN-DD Fecha: 13/07/2023	S/. 2,415.99	No hubo depósitos desde admitida la demanda

03975-2021-0- 1708-JP-FC-01	OFICIO: 3975-2021-0- 1708-JP-FC-01/RN-DD Fecha: 24/11/2022	S/. 1,651.49	No hubo depósitos desde admitida la demanda
02505-2021-0- 1708-JP-FC-01	OFICIO: 2505-2021-0- 1708-JP-FC-01/RN-DD Fecha: 02/11/2022	S/ 3,394.90	No hubo depósitos desde admitida la demanda

Capítulo V

La contrastación de la hipótesis

5.1 La discusión de los resultados

5.1.1. Discusión del objetivo específico: “Estudiar los lineamientos de la política pública orientada a garantizar el bienestar familiar”

Es importante dar inicio a esta discusión con el enfoque que se recoge de los antecedentes lo cual ha servido para reconocer el nivel de conocimiento existente sobre el ámbito de los alimentos como una garantía que está a cargo del Estado, interesante saber la manera en que se ha tratado este tema en el mundo académico, lo cual se traslada a un espacio de discusión a fin de entender dichos lineamientos y saber si es posible usarlos como punto de partida para el análisis que propende esta investigación o si más bien resulta útil establecer un factor de crítica en la evaluación de dichos trabajos previos.

En tal sentido se ha observado la investigación desarrollada por Chávez (2017) sobre cuya determinación cabe cuestionar ¿Que mecanismos debe adoptar el Estado para salvaguardar los derechos del niño alimentista? Esta pregunta conduce a la necesidad de conceptualizar la existencia de mecanismos como parte de la acción estatal para conseguir un espacio de equilibrio para el desarrollo social, esto se promueve a través de estrategias planteadas de acuerdo a los sectores que se han creado para atender las principales necesidades de la sociedad.

Como se indica, la función del Estado se orienta hacia el logro de objetivos relacionados con la necesidad social, esto se da generalmente mediante los servicios públicos, como es el caso de la salud, justicia y otras carteras que se han creado

como organización política del Estado a través del Poder Ejecutivo; esta función de crear pautas puntuales para la atención de estas necesidades surge en este órgano de poder y permite diseñar un esquema de acción de parte del Estado. Todo este diseño se conoce como la política pública desarrollada con el fin de adoptar una guía de acción estatal, siendo así, interesa saber si la protección familiar se incorpora como parte de este tipo de estrategias.

Para reconocer el funcionamiento de estas políticas públicas, debe señalarse que estas parten del reconocimiento de la existencia de necesidades básicas, las cuales se fundan en los derechos de las personas, esto se entiende esta normado constitucionalmente mediante los derechos fundamentales que representan las principales garantías para la realización del ser como parte de un grupo social. Es importante considerar que la protección familiar se comporta como un mecanismo de acción estatal y que se ubica normativamente en la Constitución como parte de la organización estatal, pero que además al vincularse con los derechos de cada sujeto, participan sobre ello la protección de la dignidad sobre todo lo que se ha de garantizar.

El caso de la dignidad aplicada en los factores de protección estatal respecto a la familia requiere no solo de la existencia de parámetros que permitan consolidar derechos personales sino también un esquema que brinde seguridad jurídica a los demás miembros de la sociedad; esto sobre todo atendiendo al campo de la limitación de los derechos, dado que ningún derecho es absoluto siempre existirán deberes que organizan un esquema de equilibrio en el desarrollo social. La dignidad implica el desarrollo del ser en un espacio de armonía, esto además incorpora para el caso de los menores de edad o los incapaces relativos, la necesidad de que se les provea de los alimentos, lo cual no solo es responsabilidad de cada sujeto que tiene

a cargo dicha función, también le compete al Estado organizar una estructura de viabilidad para ejercer control sobre el cumplimiento de esta obligación.

Es interesante el cómo se ha diseñado con el paso del tiempo un esquema de cumplimiento de la obligación alimentaria, pero lamentablemente no alcanza las expectativas de la gran mayoría de casos en los que se advierte una suerte de costumbre respecto al incumplimiento, que sin duda alguna obedece a la intervención de ciertos factores que no necesariamente se derivan de una cuestión subjetiva, sino más bien a cuestiones materiales, esto último estaría directamente vinculado con el aspecto económico.

De acuerdo con lo señalado, le toca al Estado atender este tipo de problemática, sin duda alguna lo ha diseñado, pero dicho esquema de protección no es lo suficientemente efectivo, desde luego esta observación se orienta al punto de vista jurídico, como interés de la sociedad se tiene la necesidad de ser atendido adecuadamente por un sistema de justicia que mínimamente garantice la protección respecto a los derechos que le son inherentes. Ante esta situación, la organización estatal a través de los tiempos ha creído conveniente crear un esquema de sanción ante el incumplimiento, lo cual no se observa como un mecanismo lo suficientemente efectivo.

Resulta necesario que las acciones que promueva el Estado, se orienten hacia una finalidad de protección sobre la situación familiar con especial atención a los alimentos que se les debe brindar a los menores dependientes, en tal sentido se precisa de la creación de mecanismos jurídicos que solventen el problema del incumplimiento; lo que se observa en esta investigación, cabe señalar que la orientación del análisis está enfocado en ver si la Omisión a la Asistencia Familiar

resulta lo suficientemente efectiva para atender los casos de incumplimiento, lo cual más adelante se presentará como resultado para el análisis.

Luego de haber revisado los antecedentes de investigación que sirven de fundamento para el desarrollo de esta tesis, se traslada la observación hacia el contenido teórico que sirve de base para la comprensión de los efectos que se presume debiera producir la aplicación de una correcta estrategia estatal dirigida a la protección del bienestar familiar. Esta indicación se refiere de manera puntual sobre el tema de los alimentos, en tanto que la estructura legislativa que ha diseñado la organización estatal peruana, se concentra en el reconocimiento del derecho como tal y la determinación del monto pensionario para trasladarlo a una sentencia lo cual asume la condición de mandato judicial.

Sobre esta situación se puede establecer el sentido crítico respecto a la orientación que tiene la estructura legislativa, precisamente para lograr el cumplimiento satisfactorio de los mandatos judiciales de alimentos; la tendencia no supera una condición de proporcionalidad referente a la determinación de los montos en dichas pensiones, lo cual puede ser un elemento de origen respecto a la configuración de problemas posteriores respecto al pago de estas obligaciones.

Además de ello es preciso cuestionar si existen alternativas de solución al tema de incumplimiento, por lo que interesa saber ¿Que otro tipo de criterio hace falta incorporar a la legislación peruana de alimentos, para satisfacer de manera eficiente un mandato judicial de alimentos? Como se ha dicho anteriormente la estructura del proceso de alimentos se limita a la determinación del derecho y el

monto de la pensión a satisfacer, más luego en cuanto a la ejecución no se verifica un enfoque de apoyo al cumplimiento de la obligación. Vale decir que solo se limita a la contabilización de las cantidades pendientes de pago para ser trasladadas hacia el ámbito del derecho penal a fin de que se proceda con la denuncia por omisión a la Asistencia Familiar.

Esto no se aprecia como una medida lo suficientemente satisfactoria para lograr el cumplimiento de la obligación de alimentos establecida en el mandato judicial correspondiente; ello en tanto que la percepción del derecho penal como un ámbito en el que se protegen bienes jurídicos, no opera de manera directa para el caso de los alimentos, en tanto que el bien jurídico del delito de Omisión a la Asistencia Familiar, se enfoca sobre el incumplimiento del mandato judicial, mas no de la protección del derecho de alimentos de manera directa, es por lo mismo que no se discute el derecho en sí, más únicamente se trata de verificar si se ha pagado o no la pensión.

Este ámbito conlleva a un resultado en la mayoría de casos lesivo sobre la propia necesidad, en tanto que según lo permite la estructura del ordenamiento procesal penal, se incorporan criterios de oportunidad para el imputado, llegando incluso al fraccionamiento de la liquidación pendiente de pago hasta en cuotas que según su cantidad terminan lesionando la propia necesidad del menor, puesto que en ocasiones no se termina por cumplir y se reinicia la discusión sobre la responsabilidad penal ante una circunstancia revocatoria del criterio de oportunidad, esto es la constante tensión jurídica y emocional para el alimentista.

Según lo descrito la estrategia actual que se basa en un criterio de satisfacción para el cumplimiento del mandato judicial en el caso de alimentos, no resulta del todo satisfactoria, y hasta resulta lógico, puesto que el derecho penal solo tiene una función de retribución por las acciones cometidas, a fin de establecer una sanción, mas no se ocupa de garantizar el cumplimiento constante de la obligación.

Esta función debería estar orientada y diseñada para que se ejecuten acciones para el cumplimiento de la obligación, bajo el entendido caso de que es precisamente la fase de ejecución en la que se encuentran los procesos de alimentos con liquidación de pensiones devengadas. Esto significa que tal potestad debe ser asumida por el mismo Juez Civil que ordena la pensión a través del mandato judicial, puesto que bien pueden aplicarse las condiciones procesales que opera ante el incumplimiento de esta obligación para ser atendido como un proceso de ejecución, desde luego con medidas especiales que se ajusten a la necesidad y realidad de las partes intervinientes y la naturaleza del proceso propiamente dicho.

Ha de comprenderse el concepto básico de las políticas públicas que diseñan estrategias destinadas a la satisfacción de los intereses públicos, entre los que se encuentra la protección de la familia y que como tal incluye la satisfacción de los alimentos, por lo mismo resulta adecuado consultar ¿Qué medidas puede establecer el Poder Judicial, para que los procesos de alimentos se ejecuten en un plazo razonable?

La acción cuestionada recae sobre un órgano de poder que ejerce control en la organización estatal, lo cual implica una posibilidad de traslación de poder sobre

dicha institución para aplicar las políticas públicas diseñadas por el Estado para cumplir con la obligación de asistencia social, principalmente en los intereses relacionados con la familia. En virtud de ello sería posible que el Poder Judicial adopte ciertas medidas o mecanismos de apoyo para una más ágil atención de los procesos judiciales en los que intervenga el interés superior del niño.

La existencia de plazos en el proceso que se sigue por el derecho de alimentos, en concepto permite la satisfacción de tal derecho en virtud de su condición razonable, criterio bajo el cual han sido creados. El principal problema que tiene como consecuencia el desarrollo de un proceso sin la condición de razonabilidad respecto al plazo se vincula directamente con la amplia carga procesal que existe en los diferentes juzgados que se ocupan de este tipo de procesos.

Tal condición bien podría apoyarse en una solución basada en medidas que debiera aplicar el Poder Judicial para lograr un adecuado cumplimiento de plazos, las condiciones que se requieren para que los procesos se desarrollen de manera fluida, irían desde medidas ampliatorias de presupuesto, infraestructura y personal humano, lo cual permitiría establecer un sistema de justicia célere.

TOMA DE POSTURA:

Según lo que se ha podido estudiar respecto a los lineamientos de la política pública orientada a garantizar el bienestar familiar, se tiene que tales estrategias que adopta el Estado para asegurar una línea de acción a fin de garantizar las necesidades de la ciudadanía tienen diversos aspectos de acción, uno de ellos es el

que corresponde a la tutela de los derechos familiares, en tanto que la meta es garantizar el bienestar de esta unidad básica de la sociedad. Todo ello se enmarca en una finalidad de bienestar atendiendo los derechos que se vinculan a la familia, siendo parte importante de ello la seguridad que debe procurarse sobre la manutención de los integrantes de la familia.

Ha de entenderse que las estrategias que componen la política pública se destinan a la creación de reglas que promuevan el control de la actividad social en tanto al campo de obligaciones que se encasillan en el ámbito familiar. Dicho de otro modo, la obligación de manutención corresponde a la propia familia, con la debida responsabilidad de los jefes cabeza de familia quienes se ocupan de los alimentos en forma general, en ese nivel será el Estado quien se encargue del control de dicho cumplimiento, para lo cual se precisa de la creación de reglas que establezcan un fin de resguardo ante el incumplimiento de esta protección familiar.

5.1.2. Discusión del objetivo específico: “Describir la base doctrinaria que justifica la protección de los alimentos del menor ante el incumplimiento de la obligación”

La revisión doctrinaria que se ha realizado en torno a los alimentos como derecho permite reconocer un sentido garantista que esta a cargo tanto de los obligados directamente, como son los padres de los menores, así como por parte del Estado. Esto permite cuestionar ¿Cómo se comprende la garantía del derecho alimentario?

Teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico tal cual se diseña en función a la jerarquía normativa, se puede señalar que el derecho a los alimentos ocupa un lugar trascendental en el primer orden de dicha estructura, puesto que se contempla en el ámbito constitucional bajo el carácter de fundamental. La precisión de esta característica opera en tanto que se vincula a los alimentos con la existencia del ser, siendo así, el tenor normativo constitucional que se erige en función al carácter antropocéntrico, reglas destinadas a la protección del ser humano, será lo que permite establecer a los alimentos como una garantía.

Como tal se habla de una protección destinada a la subsistencia del ser, pero habrá de entenderse de ello que la propia existencia del ser no solo se traslada hacia el ámbito de la alimentación, puesto que para que el ser humano persista en el tiempo requiere además de estos alimentos, de otros factores que permitan su desarrollo, tal es el caso de elementos de vestido, educación, vivienda, distracción y otros que permitan consolidar el desarrollo del ser. Es en función a estos criterios que se determina a quien corresponde otorgar el derecho, puesto que, según la propia normativa constitucional, existe una figura destinada a tal protección, esto es la patria potestad, en virtud de lo cual quien ostenta esta categoría será aquel que tenga la obligación de proveer de estos alimentos, obviamente en sentido amplio.

La determinación específica de esta obligación depende siempre del desarrollo legislativo que se deriva de la propia normativa constitucional, es por lo mismo que la condición de alimentos debe estar trasladada hacia un ámbito de garantía, la misma que depende de la intervención del Estado para consolidar dicho fin. Vale decir que la función de control social que le corresponde a la organización

estatal es lo que orienta a la creación de políticas públicas basadas en el tenor del principio protector de la familia y los que la conforman.

Sin duda alguna, la estructura legislativa que se diseña en función a las políticas antes mencionadas, tendrán fases de intervención, puesto que en primer lugar la garantía de este derecho que le corresponde al Estado inicia el control de la actividad comercial y económica que se desarrolla en la sociedad, es así como se produce la creación de empleo, que en función a la empleabilidad de cada sujeto podrá alcanzar un nivel de satisfacción en virtud a lo que se recibe como compensación por dichas labores, es así como de manera indirecta se garantiza la protección de la familia respecto a los alimentos.

Además de ello se entiende como otro tipo de garantía estatal derivada de la normativa constitucional y desarrollada legislativamente, en tanto pueda o deba intervenir ante la existencia de conflictos producidos entre quienes deben otorgar los alimentos y quienes deban recibirlos. La intervención estatal a este nivel se ha dejado a cargo del sistema de justicia, mediante el cual se aplican las reglas que se han creado estratégicamente por las políticas estatales para atender este tipo de controversias.

Es en función a lo señalado es propicio cuestionar ¿Qué tipo de estructura se diseña para asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria? En función a la necesidad social es que nace la estructura del proceso de alimentos, en tanto que la necesidad de percibirlos obliga al interesado o a su representante acudir al sistema de justicia para que sea atendida su solicitud. El desarrollo de este proceso se

advierte como útil, necesario y medianamente satisfactorio, ello en tanto que la atención de las pensiones alimenticias se consolida sin un carácter de uniformidad.

Esta es una realidad constante, la cual ha obligado al Estado para establecer pautas de protección, la cual se presume esta consolidada por las medidas que se adoptan ante el incumplimiento, las mismas que se orientan hacia una esfera de sanción o reproche por dicha omisión, lo cual sale del marco de protección de los alimentos. Esta indicación se hace en tanto que el hecho de sancionar por una acción puede ser un efecto de consecuencia de los actos omisivos, pero no debe apartarse del concepto a la necesidad del alimentista.

Si bien es cierto la contemplación de una figura en el ámbito penal conlleva a la sanción ante el incumplimiento, ello no resulta suficiente para alcanzar un nivel de satisfacción de la necesidad alimentaria, lo cual se observa en función a los límites que establece la propia estructura punitiva, puesto que solo se enfoca en la retribución del hecho mediante un castigo como es el caso de la restricción de derechos. Tal vez el tema de la sanción no debiera derivarse al ámbito penal, puesto que el ámbito civil tiene también la potestad sancionadora al igual que en el aspecto administrativo.

Esta forma de intervenir que ha diseñado la política pública no resulta del todo satisfactoria en tanto que las funciones sancionadoras no alcanzan al derecho alimentario para obligar al cumplimiento de la obligación, esto dado a que en la generalidad de los casos el factor que determina esta omisión es la falta de recursos. Esto último lleva a la idea de que el problema estaría siendo generado más bien por

una omisión estatal, en tanto que la política pública en el ámbito de la generación de empleos no resulta del todo satisfactoria.

Según lo planteado respecto a la necesidad de establecer pautas de protección y que deban ser asumidas por la estrategia pública, y teniendo en cuenta que este tipo de derechos se contemplan a nivel del derecho internacional conviene cuestionar ¿cuál es el efecto de la traslación convencional respecto al derecho de alimentos en el derecho interno?

Al advertir que según el derecho comparado, la estructura normativa existente aún no se ha convertido en una regulación satisfactoria, puesto que los resultados respecto al incumplimiento de la obligación alimentaria no se aprecia desde un punto de vista idóneo en función a los resultados; cabe indicar la necesaria revisión del traslado del derecho convencional hacia la estructura del derecho interno, por lo mismo que se advierte que la figura del derecho alimentario tendría que recogerse para ser protegido bajo un parámetro de garantía, mas no de remedios o sanciones.

La contemplación del derecho alimentario a nivel convencional depende de su origen también convencional en tanto que deriva como un derecho humano, esto es lo que impulsa a su protección y a que se desarrollen convenciones y acuerdos que diseñan un ámbito de garantía. Este enfoque se presume debe ser trasladado a cada uno de los Estados parte que convienen su atención, lo cual sin duda alguna depende del carácter soberano que le da independencia a cada Estado para orientar dicha protección según sus criterios estratégicos y las pautas de su propia estructura normativa.

Por tal razón se advierte que de manera general el traslado legislativo de dicha protección no resulta del todo satisfactorio, dado que la función de garantía no queda cubierta en su totalidad, esto en tanto que el carácter de garantía sobre el cumplimiento se ha dejado de lado al trasladar la protección hacia el ámbito del derecho penal.

TOMA DE POSTURA

En función a la meta trazada que corresponde a la descripción de la base doctrinaria que justifica la protección de los alimentos del menor ante el incumplimiento de la obligación, se puede señalar que en primer orden existe un fundamento de corte constitucional que se vincula directamente con el derecho a la vida, en tanto que se procura asegurar la manutención de los menores a fin de asegurar la supervivencia y su desarrollo integral. Esta justificación parte de un aspecto de protección familiar que también tiene un origen constitucional, es así que las razones por las que se incorpora en el ordenamiento pautas que condicionan la conducta de los obligados alimentistas bajo reglas coercitivas.

Del mismo modo se aprecia una justificación bajo el fundamento doctrinario de la tutela jurisdiccional, lo cual consolida una secuencia de acciones en el desarrollo de un proceso tanto a nivel civil para el reconocimiento del derecho como tal, así como en el ámbito penal que se ocupa de la sanción por el incumplimiento de tales obligaciones. También se aprecia la participación de la teoría de control social que corresponde al Estado ejercer, con la intención de monitorear la actividad tanto social, así como la conducta particular de los obligados. Finalmente, este

contexto justificante tiene una vinculación directa con el sentido de control convencional, en tanto que desde el ámbito internacional se ejerce una pauta de dirección para incorporarse en el derecho interno.

5.1.3. Discusión del objetivo específico: “Analizar los efectos de la política pública de garantía del bienestar familiar en la realidad de los procesos de alimentos en fase de ejecución en los juzgados de familia de la ciudad de Chiclayo”

Conforme se hubo diseñado el análisis para esta investigación, se accedió a la información proporcionada por el poder judicial, respecto de los procesos de alimentos en la fase de ejecución; en los mismos que se ha verificado la constante presencia de ciertas características vinculadas con el incumplimiento de la obligación alimentaria, por lo mismo que se cuestiona ¿cuál es la característica común de los procesos observados en la realidad respecto a la ejecución de los alimentos?

Tal cual se ha indicado, una de la principales características de los procesos de alimentos, es el hecho de que la pensión ordenada no se logra cumplir con eficiencia, esto es que la necesidad del alimentista depende de la voluntad del obligado y en el caso de incumplimiento de la gestión que se pueda hacer para exigir el pago de la pensión. Este incumplimiento puede darse en función a diversas razones, lo cual no determina una justificación en tanto que la exigencia de los alimentos tiene un respaldo de nivel constitucional por tratarse de un derecho fundamental.

El estado de cosas que se propicia por el incumplimiento del pago, además de la insatisfacción, altera la condición de vida del alimentista, esto implica efectos tanto psicológicos como físicos, en virtud de ello se presenta la posibilidad jurídica de exigir el cumplimiento de la pensión, aun cuando esto implica un trámite que a juicio de esta investigación no tiene una ruta adecuada para alcanzar la satisfacción.

Las condiciones en las que se produce el incumplimiento están diseñadas jurídicamente, por lo mismo que su aplicación debe ser objetiva, pese a que se pudieran generar posibilidades de exigencia por parte de la judicatura civil, estos expedientes con su respectiva liquidación son derivados a otro ámbito del sistema de justicia como es el derecho penal. Es así que se presenta la otra característica de los procesos de alimentos que es precisamente la recurrencia de liquidaciones por falta de pago. Es correcto que deban realizarse cálculos sobre las cantidades adeudadas, con lo que no se coincide es el hecho de que tenga que salir del imperio de la judicatura civil, puesto que este simple hecho altera la naturaleza jurídica del reclamo, en tanto que el enfoque de la intervención del sistema de justicia corresponde a la sanción antes que al cumplimiento de la obligación alimentaria.

Otra característica saltante es el hecho de que, en esta nueva vía, luego de un tránsito complejo del proceso penal, suelen consolidarse acuerdos respecto a la manera en que se ha de cumplir con la obligación, esto conlleva a una nueva posibilidad de incumplir, puesto que, pese a la aparente voluntad, el pago de las cuotas acordadas no termina por cumplirse a cabalidad, siendo el resultado de ello, el incremento de la insatisfacción de los alimentos que le corresponde al reclamante.

Según lo descrito en función a lo que se ha observado de los expedientes de alimentos, las características comunes impulsan la acción estatal hacia el interés de solucionar este tipo de conflicto, el mismo que opera en razón de pautas que se presume estarían procurando la satisfacción de los alimentos, es por ello que se cuestiona ¿las reglas destinadas a controlar la actividad de cumplimiento de los alimentos logran su función?

Como tal, toda actividad de control respecto a las acciones que se desarrollan en el ámbito social va a corresponder al Estado, esto quiere decir que dicha función se ha de orientar con base en las políticas públicas diseñadas para la gestión. En el caso de la intervención del Estado a través del sistema de justicia, se debe indicar que la política pública no ha de limitarse a la determinación de un derecho a través de una sentencia, es necesario además crear las pautas para que el mandato contenido en ella se ejecute correctamente y así lograr la satisfacción del derecho.

Esta pauta general que controla la ejecución de los mandatos judiciales existe en el propio ordenamiento civil, lo cual permite al vencedor en un proceso acceder a la tutela para que se proceda al cumplimiento de la orden contenida en una sentencia. Tal es el caso desvirtuado de los procesos de alimentos, que estando en la fase de ejecución del proceso, no se opta por tales medidas de control diseñadas en el ámbito civil, pues en función a la construcción legislativa que

orientó la política pública en su momento, consolida lo que se conoce como el proceso de omisión a la asistencia familiar.

La única justificación que se puede encontrar respecto a este diseño sobre el proceso de alimentos con incumplimiento de la obligación es el hecho de que se pretende una urgente atención del derecho mediante la coerción que implica la acción penal, puesto que nadie quiere ser privado de su libertad personal, lamentablemente este efecto no se puede vincular con lo que realmente interesa que es la protección de los intereses del alimentista. Lo señalado en la realidad mas bien termina por construir un efecto negativo y de retraso como es el común de los casos en el ámbito penal.

Como se ha explicado, las condiciones y características en que se presenta la realidad del proceso penal de alimentos, permite hacer un razonamiento lógico referido a la insuficiencia del sistema de control diseñado para el incumplimiento de los alimentos, en tanto que la coerción no surte los efectos de satisfacción del derecho, vale decir que el supuesto control diseñado por el Estado no cumple su función a cabalidad.

TOMA DE POSTURA:

Teniendo en cuenta la meta trazada respecto al análisis del efecto de la política pública de garantía del bienestar familiar en la realidad de los procesos de alimentos en fase de ejecución en los juzgados de familia de la ciudad de Chiclayo, es posible indicar que el desarrollo de las estrategias destinadas a la satisfacción de

los alimentos en base a la política pública de garantía sobre el bienestar de la familia, no alcanza a cumplir cabalmente su función, ello en tanto que las características comunes de los procesos se orientan precisamente en el campo de la insatisfacción de los alimentos, la recurrencia de liquidaciones y el incumplimiento de los acuerdos tomados a nivel del proceso penal.

Por tales condiciones se advierte que el problema tiene un origen de percepción de la realidad, puesto que asume como opción de control y hasta solución en base al traslado del proceso al ámbito del derecho penal tal vez con la intención de generar coerción sobre el obligado a fin de que se cumpla el pago de la pensión. Lo descrito tiene una posibilidad de mejora en tanto que la fase de ejecución en la que se encuentran los procesos, por tratarse del ámbito civil, le correspondería hacer uso del proceso abreviado de ejecución, obviamente con las variaciones jurídicas y legislativas correspondientes a la naturaleza jurídica del derecho de alimentos.

5.2. Validación de las variables

5.2.1. Validación de la variable independiente: “Política pública orientada a garantizar el bienestar familiar”

Debe señalarse de manera inicial el sentido que adquiere la participación de la variable independiente en el trabajo de investigación, lo cual se refiere a la percepción conceptual de la causa del problema referido a la estrategia que desarrolla el Estado como política pública, con especial atención del ámbito de bienestar familiar. Es sobre ello que se han estudiado las fases que se incorporan para alcanzar la creación de la política pública en tanto estrategias para lograr satisfacer las necesidades de la población.

Es así que respecto a los lineamientos de la política pública orientada a garantizar el bienestar familiar, se tiene que tales estrategias que adopta el Estado para asegurar una línea de acción a fin de garantizar las necesidades de la ciudadanía tienen diversos aspectos de acción, para tales efectos es necesaria y exigible la verificación de cada uno de los aspectos sociales que se presentan como desventaja para la ciudadanía, que en sí deben ser contemplados también en razón de los niveles de responsabilidad estatal.

Como tal se entiende como apropiado que la tutela de los derechos en función a las garantías establecidas constitucionalmente está a cargo del Estado como organización política, existen diversas garantías que se contemplan de necesidad de protección, entre una de ellas se ubica la que corresponde a la tutela de los derechos familiares, en tanto que la meta es garantizar el bienestar de esta

unidad básica de la sociedad. Todo ello se enmarca en una finalidad de bienestar atendiendo los derechos que se vinculan a la familia, siendo parte importante de ello la seguridad que debe procurarse sobre la manutención de los integrantes de la familia. Esta percepción particular depende de las condiciones generales que se han ido adaptando a lo largo del desarrollo normativo, es así que se asumen derechos fundamentales como la base de protección familiar, esto es vinculados al derecho a la vida, la dignidad, como justificación de los alcances del contenido esencial.

Ha de entenderse que las estrategias que componen la política pública se destinan a la creación de reglas que promuevan el control de la actividad social en tanto al campo de obligaciones que se encasillan en el ámbito familiar. Dicho de otro modo, la obligación de manutención corresponde a la propia familia, con la debida responsabilidad de los jefes cabeza de familia quienes se ocupan de los alimentos en forma general, en ese nivel será el Estado quien se encargue del control de dicho cumplimiento, para lo cual se precisa de la creación de reglas que establezcan un fin de resguardo ante el incumplimiento de esta protección familiar.

De acuerdo al planteamiento de la investigación y las discusiones que se han desarrollado, se ha logrado validar la variable independiente bajo la siguiente afirmación:

La política pública en el Perú orientada a garantizar el bienestar familiar no ha verificado correctamente los factores vinculados con la obligación alimentaria.

5.2.2. Validación de la variable dependiente: “La satisfacción de los alimentos del menor ante el incumplimiento de la obligación”

En función a la meta trazada que corresponde a la descripción de la base doctrinaria que justifica la protección de los alimentos del menor ante el incumplimiento de la obligación, se puede señalar que en primer orden existe un fundamento de corte constitucional que se vincula directamente con el derecho a la vida, en tanto que se procura asegurar la manutención de los menores a fin de asegurar la supervivencia y su desarrollo integral. Esta justificación parte de un aspecto de protección familiar que también tiene un origen constitucional, es así que las razones por las que se incorpora en el ordenamiento pautas que condicionan la conducta de los obligados alimentistas bajo reglas coercitivas.

Del mismo modo se aprecia una justificación bajo el fundamento doctrinario de la tutela jurisdiccional, lo cual consolida una secuencia de acciones en el desarrollo de un proceso tanto a nivel civil para el reconocimiento del derecho como tal, así como en el ámbito penal que se ocupa de la sanción por el incumplimiento de tales obligaciones. También se aprecia la participación de la teoría de control social que corresponde al Estado ejercer, con la intención de monitorear la actividad tanto social, así como la conducta particular de los obligados. Finalmente, este contexto justificante tiene una vinculación directa con el sentido de control convencional, en tanto que desde el ámbito internacional se ejerce una pauta de dirección para incorporarse en el derecho interno.

En el sistema de justicia peruano no es efectiva la satisfacción de los alimentos del menor ante el incumplimiento de la obligación.

5.3. Contrastación de la hipótesis

Determinación final de la tesis

La política pública en el Perú orientada a garantizar el bienestar familiar no ha verificado correctamente los factores vinculados con la obligación alimentaria, por lo cual en el sistema de justicia peruano no es efectiva la satisfacción de los alimentos del menor ante el incumplimiento de la obligación

Hipótesis inicial	Determinación final
Se precisa de la adecuación de la política pública orientada a garantizar el bienestar familiar con el fin de conseguir la satisfacción de los alimentos del menor ante el incumplimiento de la obligación.	La política pública en el Perú orientada a garantizar el bienestar familiar no ha verificado correctamente los factores vinculados con la obligación alimentaria, por lo cual en el sistema de justicia peruano no es efectiva la satisfacción de los alimentos del menor ante el incumplimiento de la obligación

Conclusiones

Conclusión general

Se ha llegado a concluir que la política pública en el Perú orientada a garantizar el bienestar familiar no ha verificado correctamente los factores vinculados con la obligación alimentaria, por lo cual en el sistema de justicia peruano no es efectiva la satisfacción de los alimentos del menor ante el incumplimiento de la obligación.

Conclusiones específicas

Primera:

Se llega a la conclusión luego de estudiar los lineamientos de la política pública orientada a garantizar el bienestar familiar, que corresponde uno de ellos a la tutela de los derechos familiares, en tanto que la meta es garantizar el bienestar de esta unidad básica de la sociedad. Tales estrategias que componen la política pública se destinan a la creación de reglas que promuevan el control de la actividad social en tanto al campo de obligaciones que se encasillan en el ámbito familiar, encargándose el Estado de controlar dicho cumplimiento, para lo cual se precisa de la creación de reglas que establezcan un fin de resguardo ante el incumplimiento de esta protección familiar.

Segunda:

Se llega a concluir en función a la observación doctrinaria que justifica la protección de los alimentos del menor ante el incumplimiento de la obligación, que existe un fundamento constitucional vinculado con el derecho a la vida y la garantía

de protección familiar, condicionando la conducta de los obligados alimentistas bajo reglas coercitivas. De igual modo la tutela jurisdiccional, que consolida una secuencia de acciones en el desarrollo de un proceso civil, así como en el ámbito penal que se ocupa de la sanción por el incumplimiento de tales obligaciones, que va de la mano con el control social que corresponde al Estado ejercer, así como el control convencional, que influencia en el derecho interno.

Tercera

Se concluye en función al análisis del efecto de la política pública de garantía del bienestar familiar en la realidad de los procesos de alimentos en fase de ejecución en los juzgados de familia de la ciudad de Chiclayo, que el desarrollo de las estrategias destinadas a la satisfacción de los alimentos en base a la política pública de garantía sobre el bienestar de la familia, no alcanza a cumplir cabalmente su función, determinación fundamentada en la insatisfacción de los alimentos, la recurrencia de liquidaciones y el incumplimiento de los acuerdos tomados a nivel del proceso penal. Una opción de control sería el proceso de ejecución, con las variaciones jurídicas y legislativas correspondientes a la naturaleza jurídica del derecho de alimentos.

Recomendaciones

Primera:

Se sugiere que la organización política del Estado tome como principal lineamiento previo para el desarrollo de las estrategias que diseñan la política pública en torno a la protección familiar, se ocupe de observar científicamente los factores que están generando la problemática de incumplimiento de la obligación alimentaria, para lo cual debería establecer una secuencia de análisis partiendo de los aspectos básicos mediante la participación de sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos y hasta antropólogos, cuyos resultados orienten adecuadamente la ruta de protección que debe tomar el Estado frente al incumplimiento de la obligación alimentaria.

Segunda:

Se recomienda el uso de las herramientas y figuras procesales que están presentes en el propio ámbito en que se desarrolla el proceso de alimentos; esto es que, ante la existencia de liquidaciones por pensiones pendientes de pago, no sea la primera medida el traslado al ámbito penal, sino que a través del proceso de ejecución de obligaciones pueda tratarse dicho incumplimiento bajo la potestad coercitiva que ostenta el magistrado civil. Para tales efectos dicho proceso deberá adaptarse a las condiciones especiales de los alimentos, que, en el caso de insuficiencia de medios económicos de parte del obligado, tenga el Juez la potestad de imponer una sanción con trabajos comunitarios cuyo efecto económico se dirija hacia la satisfacción de la deuda pendiente, con lo cual se estaría protegiendo

adecuadamente la necesidad de satisfacer los alimentos en base a la garantía de protección familiar.

Tercero:

Atendiendo a la recomendación sobre los trabajos comunitarios para quien incumple la obligación de alimentos, se debe considerar la necesidad de adaptar esta figura, mediante la orientación de la política pública, para que en base a la primera sugerencia de reconocer los factores económicos que provocan dicha falta, con lo cual se debe crear un organismo especializado para coordinar la generación de espacios de trabajo que permitan su desarrollo y correspondiente remuneración cuyo 60% deba destinarse al cumplimiento de la obligación pendiente de pago en favor del menor alimentista.

Cuarto:

Se sugiere que la política pública de protección social destinada por el Estado para salvaguardar el bienestar de la familia, se ocupe de acondicionar el derecho para todos los aspectos relacionados con la garantía de los alimentos, por lo mismo que también resulta de utilidad que se contemple la condición del obligado respecto a las posibilidades para prestar los alimentos a fin de suspenderla temporalmente en condiciones de grave estado de salud o condiciones de extrema pobreza, para trasladar la obligación a quien si tenga dicha posibilidad de cumplirla puesto que la manutención no es de carácter exclusivo del progenitor varón.

Bibliografía

- Bernal Del Castillo, J. (1997). *El Delito de Pago de Pensiones*. Oviedo: Editorial Bosch.
- Calva, Y., & Montalvo, G. (2021). Incumplimiento de pensiones alimenticias como vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. *Iustitia socialis. Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas*, VI(1), 369- 381. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8965288.pdf>
- Camacho, S., Jaramillo, A., Bustos, M., & García, C. (2021). Recomendaciones de políticas públicas para la garantía de derechos y la prevención de la pérdida del cuidado parental de los hijos y las hijas menores de edad de las personas privadas de la libertad. *Llapanchikpaq: Justicia*, II(2), 105-140. doi:<https://doi.org/10.51197/lj.v2i2.6>
- Chávez, M. (2017). *La determinación de las pensiones de alimentos y los sistemas orientadores de cálculo*. Lima: Universidad Ricardo Palma. Obtenido de <https://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/urp/1129/TESIS-Mar%C3%ADa%20Susan%20Ch%C3%A1vez%20Montoya.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Cueva, M. (2019). *Afectación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del demandante obligado, en el proceso de reducción de alimentos en los juzgados de Paz Letrado de Piura año 2016-2017*. Piura: Universidad Nacional de Piura. Obtenido de

<https://repositorio.unp.edu.pe/bitstream/handle/UNP/1844/DER-CUE-AVE-19.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Duarte, T., & Jimenez, R. (diciembre de 2007). Aproximación a la teoría del bienestar. *Scientia Et Technica*, XIII(37), 305-310. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/849/84903752.pdf>

Franco, S., & Sánchez, G. (2008). Las familias: ¿Un asunto de políticas públicas? *Revista Sociedad y Economía*(14), 82-105. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/996/99616725004.pdf>

Huallpa, A., Laqui, D., Pumahualcca, D., Ticona, K., & Quispe, H. (2019). Estudio sobre el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria desde las perspectivas de las Escuelas jurídico - penales. *Revista Derecho. Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Nacional del Altiplano*, IV(1), 131-144. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/6718/671872827012.pdf>

Ignacio, C. (2018). *Análisis práctico de la pensión alimenticia de los hijos en el actual código civil español: posibles soluciones para los pleitos de familia*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Obtenido de <https://eprints.ucm.es/id/eprint/48049/1/T40030.pdf>

Jarrín, L. (2019). *Derecho de alimentos*. Lima: Centro de estudios constitucionales. Obtenido de <https://www.tc.gob.pe/wp-content/uploads/2020/01/DERECHO-DE-ALIMENTOS.pdf>

Lopez Melero, M. (2014). Repercusión de la pena privativa de libertad como sanción penal en el sistema penitenciario español,. *Dialnet*.

- Martínez, J., & Gonzales, C. (2021). Pensiones alimentarias y protección social ante la pandemia en América Latina durante el 2020: oportunidades para superar la desconexión. *Apuntes*(89), 95-126. doi:10.21678/apuntes.89.1512
- Mondéjar, M. (2016). La obligación de alimentos y las políticas de la administración española sobre la protección de los mayores dependientes. *Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid*(14). Obtenido de <https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6126>
- Peña Cabrera, R. (2011). *Derecho Penal. Parte Especial*. (Vol. V). Lima: Idemsa.
- Pinillos, M. (2020). La familia y políticas públicas. *Cultura, Educación y Sociedad*, XI(1), 88-102. doi:http://dx.doi.org/10.17981/cultedusoc.11.1.2020.06
- Quispe, J. (2017). *El interés superior del niño frente al incumplimiento de la obligación alimentaria*. Loreto: Universidad Científica del Perú. Obtenido de <http://repositorio.ucp.edu.pe/bitstream/handle/UCP/226/QUISPE-Q-Trabajo-El%20inter%C3%A9s.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Restrepo, O. (2009). El derecho alimentario como derecho constitucional. Una pregunta por el concepto y estructura del derecho constitucional alimentario. *Opinión jurídica. Universidad de Medellín*, VIII(16), 115-134. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3630352.pdf>
- Reyna Alfaro, L. M. (2017). *El Incumplimiento de Obligaciones Alimentarias desde el Derecho Penal*. Lima: Cuaderno Jurisprudencial.
- Salinas Siccha, R. (2008). *Derecho Penal: Parte Especial*. Lima: Grijley y Iustitia.
- Vinelli, R., & Sifuentes, A. (mayo de 2019). ¿Debe tenerse en cuenta la capacidad económica del sujeto obligado en la tipicidad del delito de omisión a la asistencia familiar? *Ius Et Veritas*(58), 56-67. Obtenido de

<https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/download/21266/20956/>

Wilson, J. (setiembre de 2018). ¿Qué son y para que sirven las políticas públicas?

In Iure. Revista científica semestral. Ciencias Jurídicas y Notariales,
VIII(2), 30-41. Obtenido de

<https://revistaelectronica.unlar.edu.ar/index.php/iniure/article/download/492/436>